



# **LA CREDIBILIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA EN COLOMBIA**

## **Factores explicativos**

**Autor: Jhonny David López Martínez**

**UNIVERSIDAD DEL NORTE**

**MAESTRIA EN DERECHO**

**Barranquilla, Mayo 26 de 2016**



**LA CREDIBILIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA EN COLOMBIA**

**Factores explicativos**

**Tesina de Grado de Maestría en Derecho**

**Línea de Investigación: Democracia y Sociedad Civil**

**Modalidad Investigación**

**IV Corte**

**Autor: Jhonny David López Martínez**

**Asesor: Doctor Carlos Guzmán Mendoza**

**UNIVERSIDAD DEL NORTE**

**Barranquilla, Mayo 26 de 2016.**

**Resumen:**

La credibilidad de los ciudadanos en las instituciones no se genera de la misma forma que surge la confianza en las personas; más aún, la credibilidad ciudadana no es depositada homogéneamente en todas las instituciones. De allí que se distingan varios tipos de instituciones y se identifiquen niveles distintos de credibilidad respecto a cada una de ellas. Nuestro intento de explicar los niveles de credibilidad en el sistema judicial, concluye que ella se encuentra determinada por la independencia judicial; sin embargo, existen otros factores explicativos que sumados inciden significativamente en los niveles de credibilidad de la Administración de Justicia. Dentro de estas variables se identifican el nivel de educativo, el nivel de ingreso, las características territoriales y las diferencias sociológicas regionales.

Palabras clave: Credibilidad, Instituciones, Independencia Judicial, Nivel Educativo, Nivel de Ingreso, Territorio, Diferencias Sociológicas Regionales.

**Abstract:**

The confidence of citizens in institutions is not generated in the same way that arises confidence in people; moreover, the public credibility is not deposited uniformly in all institutions. Hence various types of institutions distinguish different levels of credibility and are identified regarding each. Our attempt to explain the levels of credibility in the justice system, concludes that it is determined by the judicial independence; however, there are other explanatory factors that added significantly affect levels of credibility of the justice system. Within these variables educational level, income level, local characteristics and regional sociological differences are identified.

Key words: Confidence, Institutions, Judicial Independence, Educational Level, Income Level, Territory, Regional Sociological Differences.

## TABLA DE CONTENIDO

|  | Pág.      |
|--|-----------|
| <b>Introducción</b>  |           |
| <b>Capítulo I. FUNDAMENTO TEÓRICO.</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1. La credibilidad del Sistema Judicial.</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1.1. Fuentes de la confianza social y la credibilidad institucional</b>   | <b>10</b> |
| <b>2. Independencia judicial en Colombia.</b>  | <b>11</b> |
| <b>3. Evolución histórica del Poder Judicial y normas que regulan el Sistema de Justicia en Colombia.</b>  | <b>16</b> |
| <b>4. La Educación regional diferencial en Colombia y nivel de ingresos.</b>   | <b>24</b> |
| <b>5. Las características territoriales y las diferencias sociológicas regionales.</b>   | <b>28</b> |
| <b>Capítulo II. MODELO METODOLÓGICO.</b>   | <b>34</b> |
| <b>1. Procesamiento de datos.</b>  | <b>34</b> |
| <b>1.1. Modelo de regresión lineal múltiple variables credibilidad en el Sistema Judicial por país y las variables independientes: Independencia judicial (%) y forma de ingreso de los jueces (Elección directa, elección indirecta o de carrera judicial).</b> | <b>34</b> |
| <b>1.2. Modelo de regresión lineal múltiple variables credibilidad del Sistema Judicial por país y las variables independientes: Independencia Judicial, educación, ingresos hogar, regiones y respeto a las instituciones.</b>                                  | <b>39</b> |
| <b>1.3. Asociación de la credibilidad del Sistema Judicial según Género.</b>   | <b>41</b> |
| <b>1.4. Asociación entre la credibilidad del Sistema Judicial colombiano y regiones naturales.</b>   | <b>43</b> |
| <b>1.4.1. Correspondencia Simple credibilidad del Sistema Judicial Colombiano y regiones.</b>  | <b>44</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1.5. Asociación entre la credibilidad del Sistema Judicial Colombiano y el tamaño poblacional de las ciudades en Colombia.</b>                     | <b>45</b> |
| <b>1.5.1. Correspondencia Simple entre credibilidad del Sistema Judicial y el tamaño del lugar.</b>   | <b>46</b> |
| <b>1.6. Técnica del Árbol para determinar asociación entre la credibilidad del Sistema Judicial Colombiano y algunas variables de identificación.</b> | <b>47</b> |
| <b>1.7. Análisis Factorial variables de percepción sobre la credibilidad del Sistema Judicial Colombiano, 2014.</b>                                   | <b>48</b> |
| <b>1.7.1. Estadísticos descriptivos de los enunciados utilizados para la percepción sobre credibilidad del Sistema Judicial Colombiano.</b>           | <b>48</b> |
| <b>1.7.2. Pertinencia análisis de factor enunciados utilizados para la percepción sobre credibilidad del Sistema Judicial Colombiano.</b>             | <b>49</b> |
| <b>Capítulo III. RESULTADOS.</b>  | <b>53</b> |
| <b>1. Análisis e interpretación.</b>  | <b>53</b> |
| <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.</b>  | <b>61</b> |
| <b>1. Conclusiones.</b>   | <b>61</b> |
| <b>2. Propuestas.</b>   | <b>66</b> |
| <b>Bibliografía.</b>  | <b>70</b> |

## INTRODUCCIÓN

El presente documento es el resultado de un proceso de investigación que persigue identificar los factores que inciden en la credibilidad de los ciudadanos en el sistema de justicia y el grado en que esas variables lo determinan. Alcanzar este objetivo nos permite hoy tener claro hacia dónde debe dirigirse la política pública que tiene como objeto el aumento de los niveles de credibilidad de los ciudadanos en la administración de justicia.

Este trabajo es además, una muestra concreta de las variaciones positivas que el proceso de investigación puede experimentar, en el momento en que los investigadores deciden proyectarse un objetivo de mayor envergadura, al percibir que tienen ante sí la posibilidad de un descubrimiento de mayor utilidad para la comunidad a la que va dirigido su trabajo.

Al revisar la literatura y al realizar una observación bastante simple de algunos datos sobre la credibilidad en el Sistema Judicial, independencia judicial e ingresos, se fue ampliando el objeto de nuestro estudio tanto en el contexto geográfico, como los aspectos que buscaba desentrañar. Nuestro objetivo, que estuvo inicialmente encaminado entonces a determinar la incidencia de la forma de ingreso de los jueces a la judicatura en la confianza en la administración de justicia, pasó a ser la identificación de los principales factores que inciden en la credibilidad del Sistema Judicial.

Pasó también de estar dirigido a la ciudad de Barranquilla, a estarlo a nuestro país. La otra variación se refiere a que pasó de considerar solo el aspecto del ingreso de los jueces a la judicatura a los que tenían mayor incidencia en la credibilidad del Sistema Judicial. Empezamos en ese momento a convencernos de que la justificación que pregonábamos inicialmente había dejado de ser un mero requisito de investigación, para convertirse en una nueva promesa útil para un problema que aqueja al Sistema Judicial y que parece agravarse cada día. Nace allí el convencimiento de que si podíamos identificar los factores que incidían

en la credibilidad del Sistema Judicial, estábamos visionando el inicio de la solución, al hallar el blanco hacia donde debe apuntar la política pública para la recuperación de la dignidad de la justicia, lo cual resume la justificación de este estudio.

Haber sacado del plano local el estudio para nacionalizarlo, significó también un cambio de las muestras que se habían considerado, en su tamaño y tipo. A partir de allí se empezaron a identificar las bases de datos que podían tener algunos necesarios para nuestro cometido, lo cual nos llevó a utilizar las bases de datos del Latinbarómetro y del World Project of Justice y, a su vez, a ampliar la observación de la situación colombiana, a la luz de los datos de algunos países de diversas latitudes.

A medida que nos adentrábamos en el proceso investigativo, también iban quedando nítidos conceptos como educación, ingresos, forma de ingreso de los jueces a la judicatura, independencia judicial, territorio, diferencias regionales, que poco a poco se fueron categorizando como variables independientes que teóricamente podían estar incidiendo en la credibilidad del Sistema Judicial como variable dependiente. Otros fueron descartados al hacer el análisis de regresión y algunos fueron considerados como explicativos.

Este estudio pretende mostrar que las políticas públicas igualitarias para atender distintos aspectos de la vida nacional, de contextos geográficos muy distintos, al igual que tradiciones y culturas diversas, están dando lugar a desigualdades sociales que se acrecientan y a niveles de credibilidad en el sistema judicial sujetas también a esta fórmula diferencial.

Así iniciamos nuestro estudio presentando las bases teóricas de la credibilidad del Sistema Judicial y explicando la diferenciación entre el término confianza y credibilidad, apoyándonos en la teoría, las fuentes y la percepción ciudadana. Este proceso se encuentra sujeto a la forma como concebimos las instituciones y además al trato diferencial que los ciudadanos le damos a los distintos tipos de instituciones.

Seguidamente, exponemos las nociones de independencia judicial, la evolución histórica de la rama judicial y su base normativa. Aquí nos detenemos un poco en lo concerniente a la forma de ingreso de los jueces a la judicatura, puesto que fue el punto de partida del presente estudio, pero principalmente porque el proceso se encuentra reglado por una serie de normas, cuya aplicación garantizan la independencia judicial.

La educación diferencial en Colombia y el nivel de ingreso es uno de los temas que gana campo en esta investigación, puesto que el capital humano es un componente del capital social que incide directamente en los índices de necesidades básicas insatisfechas y de inequidad social. Los ingresos también son tenidos en cuenta por la incidencia que pueden tener respecto de los procesos de autonomía administrativa e institucionalidad local, además sobre la credibilidad del Sistema Judicial, tema principal de nuestro estudio.

Las diferencias territoriales y sociológicas son un elemento explicativo que desarrollamos en este documento, que permite visualizar cómo la situación de la credibilidad en las instituciones, puede provenir de la unidad básica de la vida en comunidad: La Familia. Esta surge en un contexto marcado por procesos de intercambio, mecanismos de adaptación, visiones de la vida, tradiciones, etc., que pueden determinar grandemente el carácter de sus miembros, sus valores y concepciones de la vida.

El aspecto metodológico inicia con un análisis de regresión en el cual se considera la credibilidad del Sistema Judicial como variable dependiente y las indicadas por la teoría como variables independientes determinantes o explicativas.

Posteriormente, se utilizó la técnica de correspondencia y la técnica del árbol de decisión para determinar la asociación que se pudiera presentar entre las variables ya despejadas. Se presentan las estadísticas resumen, promedio y desviación típica o estándar, para los diferentes ítems que evalúan la credibilidad del Sistema Judicial en Colombia.



Por último, se utilizó el procedimiento de Análisis Factorial exploratorio con el fin de identificar los factores que sobresalen en el sistema judicial colombiano posibilitando una mejor interpretación. Todas las pruebas se realizaron con Excel 2010 y el software SPSS en su versión 22.

Finalmente, se expondrán los resultados del procesamiento de los datos, su análisis y las conclusiones sobre los aspectos a tener en cuenta por las políticas públicas y acciones que incrementarían de los niveles de credibilidad en la Administración de Justicia, mejorando con ello la percepción ciudadana sobre esta institución indispensable para la vida en sociedad.

## **Capítulo I**

### **FUNDAMENTO TEÓRICO**

#### **1. La Credibilidad en el Sistema de Justicia.**

Abordamos el tema central de esta investigación exponiendo el sentido del término confianza e intentando realizar una distinción que se sujeta a los aportes de los investigadores del tema y en la conveniencia advertida a partir de la observación de los datos de este estudio. Creemos conveniente que en nuestro primer acercamiento con la noción de confianza hagamos una breve referencia a los intentos de definición que han adelantado algunos científicos interesados en éste elemento social, e iniciamos revisando la perspectiva psicológica contenida en la ponencia de Esteban Laso (2007).

Concluye el psicólogo ecuatoriano que existe una relación entre riesgo, y ausencia de predictibilidad y controlabilidad. El riesgo se encuentra directamente relacionado con situaciones de incertidumbre, cuyo desenlace no puede predecirse, aparece entonces el término predictibilidad. De la incapacidad de predecir el resultado se deriva la ausencia de la otra propiedad que caracteriza las condiciones que demandan el surgimiento de la confianza (Laso, 2007).

Según Hume (1896) el cumplimiento de las promesas, la estabilidad de la propiedad privada y el consentimiento para su transferencia son requisitos que debe satisfacer toda sociedad libre. Searle (1969) detalla lo que debemos entender por promesa aduciendo que es un informe acerca de la conducta futura. Aporta el sociólogo Niklas Luhmann (1996) sobre este concepto diciendo que reducción de la complejidad que ofrece la confianza no debe entenderse, como eliminación del riesgo. Cuando decidimos confiar nos arriesgamos a ser defraudados, hacemos una apuesta en el presente, hacia el futuro, basándonos en el pasado. Señala que una persona puede confiar en que otra le cumplirá en el futuro una promesa hecha en el presente basándose en las experiencias que ha tenido en el pasado con esta misma persona.

Montero (2008) interpretando la definición que ofrece Rusell Hardin (1999), participa sosteniendo que existe confianza cuando un individuo A cree que B no le dañará consciente

o intencionadamente y actuará en su interés y lo protegerá, idea que considera cerca de la definición clásica de confianza como fidelidad y cumplimiento de promesas.

De todo esto deducimos que la confianza, más que todo particular, exige la presencia de dos sujetos, individual o plural, uno que la da y otro que la recibe; un interés común y ausencia de malicia o intención de dañar a quien decide confiar. Aclaramos que esta definición no zanja la discusión suscitada en torno a lo que se debe entender por confianza; sino que condensa el sentido en que la hemos de utilizar a lo largo de esta investigación.

Derivado de este concepto y considerándolo de gran utilidad para una mejor comprensión de nuestra propuesta abordamos el término confianza, exponiendo primero algunas dimensiones del término identificadas en la literatura actual, lo que nos permitirá acercarnos a la idea de credibilidad.

Para realizar esta aproximación, debemos aceptar la existencia de distintas concepciones de confianza (Putnam, 1995; Newton, 1999; Uslaner, 2002): particularizada; confianza social: interpersonal y generalizada, confianza en las instituciones y confianza política.

Existe confianza particularizada cuando nos fiamos de personas que conocemos o son similares a nosotros, también es conocida como confianza intensa (o *thick*) y se halla frecuentemente en pequeñas comunidades y contactos cara a cara (Montero, 2007). Por otro lado, estamos en presencia de confianza social cuando creemos que podemos confiar en la mayoría de la gente (Uslaner, 2002). Este ámbito de confianza es también conocida como confianza tenue (o *thin*) y en palabras de Granovetter (1973) es el tipo de confianza mejor adaptado a las circunstancias de la ciudadanía en las heterogéneas e impersonales sociedades modernas en las que los vínculos débiles son importantes. Coinciden con esta definición los planteamientos de Francisco Herreros (2004), cuando afirma que la confianza social es la confianza en desconocidos de quienes se desconoce información si son o no dignos de confianza.

Dentro de la confianza social podemos identificar, a su vez, dos ámbitos de confianza: La confianza interpersonal y la confianza generalizada. Hablamos de confianza interpersonal cuando nos referimos a aquella de carácter más bien relacional, es una decisión racional basada en un cálculo estratégico, una predicción sobre la conducta del otro, supone por lo tanto riesgo, puesto que la persona que confía no tiene seguridad en el otro. El segundo ámbito se centra más en aspectos culturales, que explica la decisión de confiar en las normas

y valores compartidos por los individuos de determinado contexto. La confianza generalizada sería más una conducta favorable a la sociedad que una predicción del comportamiento de los otros (Baeza: 2011).

Aprovechamos esta subdivisión y sus definiciones para precisar que existe una fuerte relación entre la denominada confianza en las instituciones con la descripción de confianza generalizada, pero no pueden confundirse. Existen algunos elementos diferenciadores como en lo siguiente veremos.

La confianza en las Instituciones pertenece a la esfera pública y se construye con base a fuentes secundarias, especialmente los medios de comunicación de masas (Baeza: 2011). Esta supone que el devenir del orden social es predecible y, en cierto modo controlable, es abstracta y tiende a ser explícita y codificada (Laso, 2007) Según Montero, Zmerli & Newton (2008) este tipo de confianza conlleva la creencia de que esta no actuará de una forma arbitraria o discriminatoria que resulte dañina para nuestros intereses o los intereses del país; sino que nos tratará, a nosotros y a los demás ciudadanos de una forma igualitaria, justa y correcta. Por esta razón es considerada como un indicador del sentimiento de los ciudadanos hacia el sistema político (Baeza, 2011).

Los ciudadanos conciben de forma distinta las instituciones a la hora de depositar su confianza (Baeza, 2011), lo cual se refleja en los estudios sobre la percepción que aquellos tienen de estas. Rothstein & Stolle (citado por Baeza, 2011) identifican tres tipos de instituciones: instituciones políticas o representativas: gobierno, parlamento y partidos políticos; las instituciones imparciales y de orden: policía, ejército, justicia, escuelas, instituciones de salud; y las instituciones de control: prensa, funcionarios o empleados públicos.

Es interesante para nosotros esta clasificación de las instituciones, desde la perspectiva de la confianza, porque nos permite proponer la existencia de otros subtipos de confianza, dentro de la confianza en las instituciones, a las que llamaremos confianza política, confianza de orden y confianza de control. La confianza política la definimos como aquella confianza que va dirigida hacia las instituciones políticas o representativas, como por ejemplo: el poder ejecutivo, el poder legislativo y los partidos políticos. La confianza de orden tiene como objeto las imparciales y de orden, tales como: la administración de justicia, el ejército, la

policía y la confianza de control la referente a las instituciones de control como: La prensa, la contraloría, la procuraduría, entre otras.

En este punto y en lo sucesivo, mostrando con ello nuestro acuerdo con los planteamientos de Montero, Zmerli & Newton (2008), al referirnos a la confianza en las instituciones utilizaremos el término *credibilidad* y reservaremos el término confianza para hacer referencia a los otros tipos de confianza social.

En este punto conviene revisar el sentido en que asumimos el término institución y hacer referencia a la percepción que la ciudadanía tiene de las mismas, a fin de que se tenga una mejor comprensión del presente estudio.

Cuando nos referimos al término institución hablamos de “Conjuntos estratificados y a veces traslapados de reglas y normas que determinan el comportamiento”. (Orion, et. Al., 2011: 75). Rawls (1971:62), coincide en que es “un sistema público de reglas”. Otros académicos que refuerzan la idea de Institución como conjunto de reglas, aunque con algunas variaciones son Grief & Laitin (citado en Orion, 2011), Streeck & Thelen (2005).

Por esta razón, no debe entenderse al sistema judicial solo como un conjunto de reglas, que si bien es cierto pueden ser uno de sus pilares su composición no se agota allí; sino que involucran una serie de elementos, actores y procesos que, regidos por la normatividad, instituciones, cumplen óptimamente la función judicial. Hemos advertido el desacierto en que podíamos estar incurriendo, al asimilar la lectura de los conceptos básicos de la teoría general de sistemas (Arnold & Osorio, 1998) quienes plantean que un sistema es un todo cuyas propiedades no son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o componentes. Advierten la identificación de los sistemas como conjuntos de elementos que guardan relaciones entre sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo. Señalan que los procesos sistémicos internos deben ser definidos sin perder de vista una concepción de sistemas abiertos, en la que se establece como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente.

Es así como involucramos todos esos elementos, actores, procesos con las instituciones y a partir de aquí nos referimos a la administración de justicia como sistema judicial. Desde luego, que al englobar el alcance, quedan incluidos en el concepto integrador todo aquello

que contribuye en garantizar la independencia judicial, las relaciones con el ejecutivo, las relaciones con la sociedad civil, etc. y que cumplen con la función judicial.

Para distinguir lo que se entiende por función decimos con el profesor Austin (2000), que representa a una actividad que es vista siempre en relación con otras. Por ejemplo, no es lo mismo un “proceso judicial” que la “función judicial”. Aclara este autor que en estos casos se usa la expresión proceso para representar actividades relacionadas y ordenadas que ocurren en un caso judicial, mientras que su función representa el papel que juega la judicatura en relación con otros aspectos de la vida social. Los estudios de procesos son parte de la teoría de sistemas, porque se refieren al estudio de las partes internas de un sistema en su contribución a la sinergia del mismo, mientras que los estudios de funciones pertenecen a los estudios atomistas cartesianos donde se estudia el aporte que cada función le hace a la estructura del evento o fenómeno estudiado, pero que no contemplan la creación de sinergia, sino sólo su papel dentro de la estructura analizada.

Orion et. Al. (2011:81) hacen un valioso aporte para ir identificando la percepción que puede tener el ciudadano de las instituciones, cuando afirma:

Un sistema político particular es en realidad un complejo de reglas interdependientes. A este respecto los sistemas políticos son fenotipos: conceptos reificados que denotan una estructura más compleja. Los científicos sociales analizan el “capitalismo”, “Francia” o el “Congreso”, como si fueran actores u objetos reales. Pero todos entienden que estos son realmente conjuntos complejos de reglas que se ajustan imperfectamente como un todo – provocando variación- y que se replican a través del tiempo.

Si complementamos esto último con lo propuesto por Alberdi (citado por Lanzara, 1999: 72), quien sostiene que:

En la sociedad política cuando no existe un sistema de normas seguro, la erosión de la confianza institucional se compensa frecuentemente con una

tendencia a la personalización de la política y con tendencias al liderazgo; es decir, un pacto de confianza personal entre el “pueblo y un líder carismático.

Entonces podríamos estar frente a una percepción de la debilidad de las normas que rigen la administración de justicia que da al traste con la erosión de su credibilidad. El ciudadano busca compensar esta desconfianza con su personalización la cual en grandes ciudades no es posible, por la dificultad de interactuar con los jueces e informarse sobre su parcialidad e imparcialidad lo que es más fácil en las pequeñas localidades.

Concluimos este apartado diciendo que la ciudadanía reconoce un conjunto de reglas en las instituciones, cuya ejecución envuelve el riesgo de que deben ser ejecutadas por seres humanos perfectos e imperfectos tal como la ciudadanía.

La razón por la cual trastocamos el término Confianza por el de credibilidad también es apoyado por la etimología de la palabra, la cual es que se encuentra precedida del prefijo de origen latín “con”, que denota unión, colaboración, reciprocidad, surgida en el momento de la comunicación de la promesa; lo cual no se da en el caso de las Instituciones donde más que una promesa es un conjunto de principios, normas y reglas preestablecidos que el ciudadano espera sean cumplidos fielmente.

Para justificar nuestra propuesta diferenciadora pasamos a estudiar los fundamentos sobre los cuales se sostiene los términos credibilidad y confianza, partiendo del reconocimiento de las fuentes de donde emanan.

### **1.1. Fuentes de la confianza y la credibilidad.**

Recogiendo lo aportado por Herreros (2003) la confianza puede ser creada de dos maneras: a través de la participación en asociaciones y, de forma directa, enviando señales que hagan que los depositarios de la confianza revisen sus creencias iniciales, acerca de lo digno de confianza que son los desconocidos.

La participación en asociaciones, como forma indirecta de creación de confianza social (Herreros, 2003), se fundamenta en que un individuo asume que sus compañeros son una muestra del comportamiento del resto de la sociedad; además, hacer parte de una asociación permite identificar propiedades de la gente confiable. La deliberación en el seno de la

asociación permite interactuar con participantes y conocer sus posiciones a cerca de desconocidos, a lo que se suma número de redes y asociaciones a las que pertenece el individuo, porque lo hacen proclive a confiar en desconocidos.

La forma directa de creación de confianza social, a través del envío de señales características de las personas dignas de confianza, se refiere al empleo o utilización de determinados signos externos para generar confianza en personas para los cuales somos desconocidos. En este apartado juega un papel crucial la identidad, en el sentido de que deben existir unos puntos comunes de contacto entre los dos sujetos.

Hoy se habla ya de un índice de confianza social en el que se incluyen variables tales como vivienda, empleo, salud, educación, prestaciones sociales, pensiones, instituciones políticas, instituciones económicas y medios de comunicación y que permitirá hacer más concreta esta forma de capital social.

Todas estas formas de creación de confianza social son distintas a las fuentes que generan credibilidad en las Instituciones consideramos entonces que un sistema de normas objetivo, público y eficaz, es la fuente principal de la credibilidad en las Instituciones, lo cual debe complementarse con una comunicación masiva de las acciones concretas que llevan estos principios de objetividad, publicidad y eficacia a la realidad social. Existen otras fuentes secundarias, especialmente los medios de comunicación de masas y un trato coherente con los principios de la administración de justicia (Baeza: 2011).

En este mismo sentido existe un intento muy útil para medir la seguridad jurídica y quizás para medir la fuerza del sistema de normas, acercándonos aún más a una medición más precisa de la credibilidad en las instituciones. Este índice permitiría reducir gran cantidad de información compleja.

Para desarrollar la idea de lo que se entiende por seguridad jurídica recogemos los argumentos de la Corte Constitucional en Sentencia C-250 de 2012, donde se dice que esta existe cuando el ciudadano tiene la certeza de que sus relaciones jurídicas serán regidas por las normatividad vigente al configurarse dicha relación y sus derechos gozan de una estabilidad que no será desconocida ante los cambios normativos. También incluye esta seguridad a la estabilidad de las obligaciones que normativamente se imponen. Este tipo ideal



debe constituir la esencia del índice de seguridad jurídica que se intenta construir y que reflejará las variaciones propias de los contextos geográficos, políticos y sociales en los que se aplique.

Vemos entonces que la seguridad jurídica reconocida por la Corte Constitucional es entonces el sistema de normas seguro, al que hacía referencia Alberdi (1996), y que es una condición necesaria para generar credibilidad en las instituciones por parte la ciudadanía. Derivado de lo anterior, incluimos este factor como la variable principal de la credibilidad en las instituciones, aunque también la distingue de la confianza social en la ciudadanía.

## **2. Independencia Judicial en Colombia.**

Dentro de los aspectos que consideramos determinan el nivel de credibilidad en la administración de justicia se encuentra la independencia judicial. Es imposible desligar este elemento base de las sociedades democráticas del surgimiento del Estado de Derecho, a partir de la Revolución Francesa. Nace allí otro elemento fundamental como lo es el principio de legalidad, el cual limita el poder estatal y le da prelación de la libertad del individuo.

Este paradigma desarrolla la idea de separación de poderes y fija los parámetros en que estos deben ponerse al servicio de la libertad individual. El surgimiento del positivismo jurídico facilitó las posibilidades de legitimación de cualquier régimen que actuara siguiendo normas preestablecidas sin importar su contenido, lo cual se concretó en experiencias desagradables del siglo pasado que lesionaron la dignidad de toda la humanidad. Esta situación exigió la optimización de la idea de justicia, que se materializaron en la limitación del poder legislativo, garantizada por el poder judicial, y un contenido normativo que protegiera los derechos fundamentales del ciudadano.

Es en este punto donde cobra forma la independencia judicial en el devenir histórico. El poder judicial se caracteriza desde entonces por su imparcialidad y se faculta al juez para que aplique el Derecho libre de injerencias indebidas, sobre todo en lo que se refiere a los demás poderes públicos y sociales.

El surgimiento de la independencia judicial en sus albores solo se percibió hasta finales del siglo XVIII cuando el debilitamiento y abolición del régimen absolutista dio lugar al inicio de la diferenciación de funciones y la relativa libertad de quienes cumplían las

jurisdiccionales. Con la proclamación del principio de independencia judicial se le quita esta facultad al Rey y se termina con la instrumentalización del Derecho como elemento de subyugación de una clase por otra. No obstante lo anterior, en el siglo XIX, el principio de independencia judicial solo significó el nacimiento de un cuerpo de funcionarios con la garantía de inamovilidad, puesto que las jerarquías internas tenían gran poder sobre la carrera judicial, manteniéndola al servicio del poder ejecutivo frente al ciudadano (Martínez, 2004).

El primer escollo que encontramos es la inexistencia de un criterio unificador de las distintas posturas a cerca de lo que debemos entender cuando hacemos referencia a ella. El Dr. Germán Burgos (2003) en un amplio estudio sobre las forma de medición de la Independencia Judicial reconoce que a pesar de la complicaciones que genera la falta de homogeneidad en el sentido que debe darse al término independencia judicial aceptamos cómo válida la exposición que hace de sus atributos, tomando algunos elementos de Becker (1970), Rossen (1987), Wroblewski (1987), Díez Picazo (1992), Salzberger (1993 y 2001), Larkins (1996) y Karlan (1998).

Coincidimos con la deducción que concluye que la teoría sobre independencia judicial se circunscribe al plano normativo y que solo a través de su medición podemos aterrizarla al positivo. Cuando mencionemos el término independencia judicial hacemos referencia a la inexistencia de un vínculo, entre un juez individual, por un lado, y las partes, el gobierno, el legislativo, las organizaciones no gubernamentales, el juez individual, los medios de comunicación, los grupos de poder económico, los otros jueces, el público general y los órganos no jurisdiccionales del sistema de justicia, por otro (Burgos, 2003).

Otra idea planteada por este autor y compartida por nosotros, sobre todo por ser de fácil comprensión, es la similitud del término “neutralidad”, para significar que el juez debe estar blindado de cualquier tipo de influencia por fuera de la ley, de cualquier otro actor, tanto en el desempeño cotidiano de sus funciones como al momento de tomar una decisión, respecto de un caso en concreto. Igualmente, deben estar excluidas de su actuar inclinaciones que no se deriven de las fuentes del derecho en determinado contexto jurídico (Burgos, Op. Cit.).

La práctica de la judicatura exige una serie de recursos para que su poder sea real y efectivo, *“es preciso dotar a los jueces de recursos organizativos, económicos, de información, educación legal, y otros, (...) No basta con que el juez tenga poder “de derecho”, es preciso que lo tenga también “de hecho”* (Burgos, 2003: Pp. 113).

Dentro de este aporte añade otros elementos para que un Juez pueda considerarse independiente: “1) *una adecuada formación (...) y 2) en la ausencia de injerencias indebidas (...) Sin estas dos cualidades no podemos hablar de un juez poderoso y parejamente independiente*” (Pp. 113).

La independencia judicial no tiene que ver con estructuras institucionales; sino, que se circunscribe al vínculo con actores políticos, evitando la influencia y actitudes indebidas; que no es otra cosa que basarse en las fuentes del derecho para la resolución de cada caso particular.

Ahora conviene hablar sobre las variables institucionales de la independencia, que constituyen las reglas del juego –formales o informales– mediante las cuales el fenómeno de la independencia tiene lugar.

Habíamos partido de la creencia en que la forma de ingreso a la judicatura podía incidir en la Confianza que genera la administración de justicia en los ciudadanos, lo cual fue desvirtuado al analizar los datos, reforzando los argumentos de Toharia (1999), quien sostiene que la elección de los jueces por el gobierno no necesariamente significan su dependencia.

La complejidad del devenir social y la interacción permanente entre instituciones que tocan diversas dimensiones del ser humano por su misma diversidad y complejidad, nos llevan a deducir que no se puede predicar, además que resultaría inconveniente, una independencia total y exclusiva del poder judicial, puesto que la relación institucional permite advertir las falencias e identificar las fortalezas para una mejor atención de los asociados y aunar esfuerzos coordinados para que este fin se realice.

La independencia judicial ha sido objeto de diversos estudios en los que se ha concluido que no se puede hablar de independencia judicial, simplemente y llanamente, sino que es necesario delimitar el sentido en el cual se utiliza el término, so pena de dar lugar a una incorrecta interpretación y, lo que es peor, acciones inadecuadas. Cuando se habla de independencia judicial podemos estar refiriéndonos a los factores externos que influyen la existencia misma del juez, los cuales se categorizan en el concepto de independencia fundamental. Sin embargo, podemos estar refiriéndonos a una independencia dinámica, cuando los elementos externos afectan la decisión del fallador (Franco, 1997).

Otros autores distinguen independencia sustantiva, referida a la autonomía de la rama judicial para dar opiniones y tomar decisiones respecto al ejecutivo y el legislativo; de la independencia estructural, cuyo sentido son acuerdos institucionales para que sea posible la independencia sustantiva (Salzberger, 1993 en Franco, 1997).

En la doctrina se pueden hallar una categorización que conjuga la autonomía del Poder Judicial en materia económica y por la inamovilidad de su personal y que se traduce en decisiones propias libres de injerencias indebidas, la cual es conocida como independencia estructural; aparejada con la idea de independencia interna que habla de la autonomía de una instancia con respecto a la otra (Rico & Salas, citado por Franco, 1997).

El profesor Andrés Franco (1997) advierte la marcada dependencia de la rama ejecutiva y plantea algunas condiciones que la facilitan o propician, como lo son el presidencialismo excesivo, la inestabilidad política, la tradición exegetica; un sistema formal y complejo en exceso; una instancia política de rendición de cuentas para la rama judicial; precariedad de la forma de ingreso de los jueces a la judicatura y la proliferación de tribunales especiales.

Existen además otros factores que afectan la independencia del sistema judicial terminan por definir las relaciones con otras ramas de poder público. Entre estos factores encontramos presiones de parte de la fuerza pública, los grupos al margen de la ley, las presiones del ejecutivo y legislativo, el cual puede influir pueden incidir con su actuación en la calidad de vida de los jueces.

La Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991 invoca la justicia como una de las finalidades del Estado, aludiendo a la intención de alcanzar y asegurar la vigencia de un orden social justo. Su desarrollo superior lo hallamos en el Título VIII de la carta política donde se evidencian el diseño institucional de la rama judicial y las funciones de los distintos órganos que la integran.

La administración de justicia tiene como principal objetivo resolución pacífica de los conflictos generados dentro de la vida en sociedad, siendo esta una de las tareas básicas del Estado, de allí que la autonomía e independencia de la Rama Judicial respecto a las otras ramas, así como la de cada uno de los funcionarios que la conforman, es condición esencial y necesaria para el correcto cumplimiento de su misión.

El artículo primero de la Ley 270 de 1996, define así la administración de justicia:

Es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la constitución política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”.

La importancia de la función judicial se ve subvalorada si no se garantiza la autonomía e independencia de los jueces, reconocida también por varios preceptos constitucionales y por los tratados internacionales, entre los que podemos enunciar el artículo 228, según el cual las decisiones de la administración de justicia son independientes y el 230, que señala que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluye este principio en su artículo octavo al establecer que *“toda persona tiene derecho a ser oída (...) por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...”*.

Recogiendo todos estos principios Constitucionales y supranacionales el artículo 5° de la Ley 270 de 1996 incluyó como uno de los principios de la administración de justicia *la autonomía e independencia de la Rama Judicial*, precisando además que en desarrollo del mismo *“Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias”*.

Según las cifras utilizadas del World Justice Project, en estudio realizado para el año 2014, Colombia se califica en el puesto 54, con un índice de independencia judicial de 0,49, para la justicia civil, lo cual lo ubica debajo de la media; y para la justicia penal el índice es de 0,35, lo cual lo ubica en el puesto 79. Lo importante de esta medición es que en ella se encuentran involucrados países de diversas latitudes, lo cual nos permite hablar de independencia judicial alcanzable, sin que esto signifique que los intentos que involucran tipos ideales como referencia no sean útiles.

### **3. Evolución Histórica del Poder Judicial y Normas que regulan la Administración de Justicia en Colombia.**

Partiendo del reconocimiento que hacemos de la seguridad jurídica como uno de los factores necesarios para generar credibilidad en las instituciones, ahondaremos ahora en la

evolución que ha tenido la administración de justicia en Colombia y las normas que la rigen, a fin de delimitar el ámbito de evaluación de la credibilidad en esta institución específica.

En el trabajo de sobre la evolución del Poder Judicial en Colombia realizada por Andrés de Zubiría (2012) encontramos que fue España, antes de la independencia de la Nueva Granada, quien incorporó varios órganos en el nivel judicial, entre los que encontramos la Real Audiencia y los jueces civiles y criminales.

Una vez dada la independencia de Colombia se advierten cinco periodos en los que se advierten trasformaciones tanto en la organización del Estado como en la administración de justicia. Estos se pueden identificar como: primera etapa centralista (1821-1850), primera etapa centro federal (1850-1858), federalista (1858-1886), el retorno al régimen centralista (1886-1991) y desde la coyuntura de la Asamblea Constituyente y Constitución Política de 1991, que hoy rige.

En la primera etapa centralista (1821-1850) el sistema judicial, a través de la Alta Corte de Justicia, tenía las atribuciones de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales. Esta alta corte estaba conformada por 5 magistrados con funciones vitalicias y conocía los negocios contenciosos de Ministros, Embajadores, Cónsules o Agentes Diplomáticos; también tenía conocimiento de los conflictos sobre los tratados y de los que se suscitaran en los tribunales superiores entre otros.

Existían cortes superiores cuyos ministros eran nombrados por el poder ejecutivo, vitalicios, y juzgados que actuaban en el plano local. Se estableció un Consejo de Estado, como órgano asesor del gobierno nacional.

La inaplicada Constitución de 1830, estableció una estructura del poder judicial, cuyas partes principales eran la Alta Corte de Justicia, las Cortes de Apelación, los Tribunales y los Juzgados.

Para hacer parte de la Alta Corte debían cumplirse los siguientes requisitos: ser colombiano de nacimiento, haber cumplido 40 años y haber sido magistrado de la Corte de Apelación.

Se delegó a la Ley definir las funciones de las cortes de apelación y eran requisitos ser colombiano, mayor de 35 años, abogado y haber sido juez de primera instancia, asesor o auditor por 3 años o haber ejercido la profesión por 6 años, para hacer parte de estas.

La responsabilidad de los magistrados de la Alta Corte de Justicia sería exigida por el senado, la alta corte exigiría la de los magistrados de la Corte de Apelación y las cortes de apelación exigirían las de los demás.

La forma designación de los magistrados y jueces no fue establecida y se conservó como entidad asesora del gobierno el Consejo de Estado.

La denominación de República de la Nueva Granada fue establecida en la constitución de 1832. Se mantiene el Consejo de Estado – formando parte del poder ejecutivo- conformado por siete consejeros elegidos por el congreso, con atribuciones para dar el dictamen para la sanción de las leyes, preparar los proyectos de ley y presentar las ternas a la Cámara de Representantes para ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Respecto al poder judicial se estableció una estructura en torno a la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales y los Juzgados.

La corte suprema conocía de los negocios contenciosos de los ministros plenipotenciarios y de los agentes diplomáticos; las controversias por los contratos o negociaciones celebrados por el poder ejecutivo; conocía de las causas criminales en que hubieran incurrido el presidente y vicepresidente; y todas las de responsabilidad de los funcionarios públicos suspendidos por el senado, por mal desempeño en sus funciones, previa acusación de la cámara de representantes.

Aparece la división de la república en distritos judiciales, los cuales definen la jurisdicción de los tribunales y los magistrados deberán llenar como requisitos: ser ciudadano granadino, ser abogado, haber sido juez de primera instancia o asesor por 3 años o haber ejercido la profesión por 4 años.

Los ministros de la Corte Suprema son propuestos por el Consejo de Estado a la cámara, para que ésta los presente al senado para su nombramiento; sin embargo, quienes presentan las listas al Consejo de Estado son las cámaras provinciales. Los magistrados de los tribunales eran designados por el ejecutivo nacional, con intervención del Consejo de Estado, de ternas

enviadas por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de listas remitidas por las respectivas cámaras provinciales y se le asigna a la Ley la organización de los juzgados.

Empieza aquí a observarse tanto la contextualización de la justicia como su politización, puesto que las cámaras provinciales, son algo similar a lo que hoy son las asambleas departamentales, según lo deducimos de la lectura del artículo 150 y 156 de la Constitución política de 1832.

Con la promulgación de la Constitución de 1843, la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito y los Juzgados siguen ejerciendo el poder judicial. La corte sigue facultada para conocer los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos, las causas contra los encargados del poder ejecutivo, secretarios de Estado o ministros de la propia Corte “depuestos” por el senado, juzgados por delitos cometidos y aquellas causas contra el presidente, vicepresidente o el encargado del poder ejecutivo por delitos comunes. Sus miembros eran elegidos por el Congreso.

Los Distritos judiciales siguen siendo la división territorial judicial, donde opera el Tribunal Superior. Se delega a la Ley la facultad de establecer el número de ministros, jueces y sus funciones; los demás tribunales y juzgados, la calidad de sus miembros y sus funciones.

Con la Constitución de 1843 advertimos el reemplazo del Consejo de Estado por un Consejo de Gobierno, como cuerpo asesor del presidente del cual son miembros el vicepresidente de la república y los ministros de Estado, ejerciendo las funciones de dar o rehusar sanción a los proyectos de Ley o demás actos legislativos provenientes del congreso, convocar al congreso a sesiones extraordinarias, y nombrar los gobernadores provinciales, entre otras.

La constitución de 1853 surgida en un ambiente de grandes transformaciones y en una época caracterizada por el surgimiento de los partidos tradicionales, cambios económicos, ideológicos y fiscales, el poder judicial no sufre grandes transformaciones en su estructura básica: La Corte Suprema de la Nación, los tribunales y los juzgados.

No obstante lo anterior, existe una variación que podemos señalar como incremento de la politización y popularización de la justicia, al ser elegidos popularmente los magistrados de la corte suprema y su designación exclusiva por el gobierno nacional cuando sobreviniere alguna falta temporal.



Esta popularización y politización de la justicia toca también a los tribunales, puesto que los magistrados y fiscales eran elegidos popularmente, quedando exento del proceso de elección popular solo los jueces.

En el periodo comprendido entre 1858 y 1886, sobreviene la época federal, que inicia con la conformación de los nueve “estados soberanos”, en los que cada uno era la unión de varias provincias. En el primer año se crea la Confederación Granadina y el poder judicial es conformado por el senado, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados.

El senado tenía las atribuciones judiciales de conocer las causas de responsabilidad contra el presidente de la confederación o quien haga sus veces, contra los secretarios de estado, el procurador general y los magistrados de la corte suprema por “mal ejercicio en el desempeño de sus funciones”, previa acusación de la cámara de representantes o del Procurador General de la Nación.

La Ley determinaría el número de magistrados de la corte suprema cuyo número no podía ser inferior a tres. La composición, el sistema de elección y funciones de los tribunales y juzgados eran definidos por la Ley.

El país es denominado Estados Unidos de Colombia con la constitución federal de 1863 y el poder judicial gira alrededor del senado, la Corte Suprema Federal, los tribunales y los juzgados. El fuero militar surge por primera vez, por norma fundamental, con esta Constitución. Los tribunales y los juzgados que actuaban en los estados soberanos son regulados por la Ley federal o nacional.

La Constitución de 1886 resulta de una asamblea constituyente, derivada de la guerra civil de 1885. Con ella el país vuelve al modelo centralista. Nuevamente, la República se denomina Colombia y el Poder Judicial se organiza con la siguiente estructura: Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores de distrito judicial y juzgados.

La corte Suprema es el órgano superior del poder judicial y cada uno de sus 7 magistrados, se nombra con carácter vitalicio. Para acceder este cargo se debe ser colombiano de nacimiento, haber cumplido 35 años de edad, haber sido magistrado del Tribunal o ejercido la profesión durante 5 años o el profesorado en jurisprudencia en establecimiento público.

El territorio nacional siguió dividido en distritos judiciales, en los que opera un Tribunal Superior. Mediante la Ley se organizan los juzgados inferiores y para ser juez se debe ser

ciudadano en ejercicio, abogado y gozar de buena reputación. Como excepción se estableció que para ser Juez municipal no se requería ser abogado.

Esta carta política también estableció que toda sentencia debía ser motivada, la Ley podía establecer la Jurisdicción contenciosa y los jurados de conciencia para causas criminales y que podían crearse los tribunales de comercio.

El Consejo de Estado, pero todavía como un órgano asesor del gobierno nacional, conformado por el vicepresidente de la república y por seis vocales.

A su proclamación le siguieron algunas reformas. Entre ellas podemos señalar la de 1905, durante la dictadura del general Rafael Reyes, fue suprimido el Consejo de Estado, al igual que la vicepresidencia de la república.

Después de la dictadura la Asamblea Nacional de Colombia, realizó otra reforma. En ella se regula el poder judicial, integrado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados. Se establece que los Nueve magistrados que la conforman serán elegidos para períodos de cinco años, y la división en salas de esta alta corporación. Se evidenció la politización del poder judicial a nivel territorial, cuando la norma fundamental facultó a las asambleas departamentales para presentar las ternas de las que se elegirían los magistrados de los tribunales superiores.

De esta reforma nace el control constitucional en Colombia, facultad radicada en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, al igual que la excepción de inconstitucionalidad, contenida en el artículo cuarto de la Constitución Política que hoy rige.

En 1914 se restablece el Consejo de Estado, como cuerpo consultivo del gobierno nacional y facultado para preparar los proyectos de ley y de códigos, y ser el tribunal supremo de lo contencioso administrativo.

La revolución en marcha de López Pumarejo, trajo consigo la reforma de 1936, en la cual los poderes públicos pasan a denominarse ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Los consejeros de Estado son elegidos de ternas enviadas por el presidente de la República, para períodos de cuatro años, y la corporación podía dividirse en salas o en secciones. Surge con esta reforma la posibilidad de que la jurisdicción contenciosa pueda suspender “provisionalmente” los actos de la administración nacional o regional. Nacen también los tribunales administrativos departamentales con magistrados nombrados para períodos de dos años.

El acuerdo conocido como el Frente Nacional; que hasta hoy se fundamenta en la superación de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), refrendado en el plebiscito de 1957; estableció la alternación en la Presidencia de la República durante cuatro períodos, 1958 a 1974, que significaba también la alternación de todos los cargos públicos nacionales incluyendo cortes, tribunales, juzgados, de los dos partidos tradicionales. Aparece en esta reforma la cooptación para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se volvieron vitalicias las designaciones, hasta llegar a la edad sesenta y cinco años, retiro forzoso.

La Constitución de 1991, dedicó el título VIII a la Rama Judicial. Declara que la administración de justicia es función pública; el derecho a acceder a la misma; el sometimiento de los Jueces a la Constitución y la ley; la forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado; requisitos para ser magistrado; el período de los magistrados de ocho años, su no reelección y su retiro cuando cumplieran sesenta y cinco años.

La proclamación de esta nueva Constitución dio lugar a la Ley 270/96, Estatutaria de la Administración de Justicia, que fue modificada parcialmente en el año 2009 por la Ley 1285, se reglamentó de la organización y el funcionamiento de la Rama Judicial. La Corte Suprema de Justicia se mantuvo como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y su división en salas. Tiene como atribuciones actuar como tribunal de casación; juzgar al presidente de la república o a quien haga sus veces y otros altos funcionarios, investigar y juzgar a los miembros del Congreso, juzgar a los ministros del despacho, entre otras.

El Consejo de Estado, se estableció como máximo órgano de lo contencioso administrativo con las atribuciones de conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración; preparar y presentar proyectos de actos reformativos de la Constitución y proyectos de ley, conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley y conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley, entre otras.

Nace con la Constitución de 1991 la Corte Constitucional, como único órgano permanente de la jurisdicción constitucional en el país, sus nueve miembros, son elegidos por el Senado

de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y no podrán ser reelegidos. Tiene como funciones decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformativos de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación, decidir, con anterioridad a la jornada de consulta, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación, decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, entre otras.

Otro órgano judicial para el que sirve como partida de nacimiento la Constitución de 1991 fue el Consejo Superior de la Judicatura. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia lo es para los Consejos Seccionales de la Judicatura que actúan en los departamentos del país. Las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales las se resumen en administrar la carrera judicial; elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla; examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley; llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales; dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, entre otras.

Nace con esta Carta Política la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general es elegido para un período de cuatro años, por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la república, sin posibilidad de reelección y está obligado a adelantar el ejercicio de la acción penal y a investigar los hechos que puedan configurarse como delito y que sean de su conocimiento.

El sistema acusatorio se incorporó en el año 2002. El juez que ejerza las funciones de control de garantías no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función. La Fiscalía General de la Nación solo excepcionalmente puede realizar capturas y la ley fijará los límites y eventos en que proceda

la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las 36 horas siguientes.

La Carta Política de 1991 conserva las facultades de las autoridades indígenas y de los jueces de paz. Las primeras podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes. Los jueces de paz fueron reglamentados por la Ley 497 de 1998, teniendo como principios, los del tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios, la equidad, la eficiencia, la oralidad, la autonomía y la independencia. Su competencia se limita a los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no superior a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes. El cargo de juez de paz no tiene remuneración alguna.

Esta evolución del Sistema Judicial que acabamos de exponer da cuenta de nuestra inestable historia republicana, marcada por dictaduras, percepción de fraudes electorales y un conflicto armado que nos ha acompañado gran parte de nuestra historia. Hacemos referencia, muchas veces, a las fechas solo para que asimilemos lo joven que es nuestro sistema judicial y lo vulnerable y dependiente que está ante los intereses políticos y de otra índole. Hoy surge un interés político que debe también limitarse por los riesgos que envuelve todo poder por su misma naturaleza y es el de los Magistrados y jueces respecto a la designación de los funcionarios que ingresan a la rama judicial sin superar los concursos de mérito.

Esta situación puede restarle independencia al sistema judicial y puede, incluso, percibirse como un desconocimiento a la normatividad que rige su funcionamiento. Si un sistema de normas fuerte y eficaz es la principal fuente de credibilidad institucional, los magistrados, jueces y funcionarios que realizan la función de Administrar Justicia tienen que estar sujetos, creemos que más rigurosamente, a las normas que no solo determinan su actividad, sino que les conceden gran responsabilidad y dignidad.

#### **4. La Educación Regional Diferencial en Colombia y nivel de ingresos**

Con la promulgación de la Constitución de 1991, se esperaba una disminución de la inequidad regional, precisamente por la descentralización que allí se establecía. Sin embargo,

este es un problema cuyas causas se encuentran en la historia misma del país y su devenir ha mostrado que la inequidad desde el punto de vista educativo es una muestra de la fórmula utilizada desde antaño, para el diseño de la política pública nacional para todos los aspectos de la dirección del Estado.

Se ha demostrado que la educación es uno de los factores fundamentales en las diferencias del ingreso per cápita entre regiones. Las instituciones locales, por su parte, no son variables que incidan significativamente.

Las propuestas dirigidas a superar las diferencias regionales basada en la inversión en el capital humano de las regiones menos desarrolladas de un país ofrece algunas ventajas tales como la eliminación del principal factor de desventaja competitiva que tienen las regiones menos prósperas; no se puede sobreinvertir en la educación de las regiones atrasadas. Invertir en Educación tiene la ventaja de que se puede trasladar a donde resulte más rentable. Cuando el capital humano alcanza índices altos y hay una insuficiencia en las instituciones regionales o la dinámica económica no permite el desarrollo de las potencialidades, la gente busca mayores polos de prosperidad, crecimiento e institucionalidad en otras regiones, causando, por ejemplo, que los recursos físicos disponibles por habitante aumenten en las regiones apartadas por el envío de recursos de los migrantes a sus bases familiares. (Sánchez et. Al, 2014).

El profesor Andrés Sánchez et. Al (2014: 23) señala que en nuestro país *“todos los indicadores de capital humano muestran una asociación positiva, y muy significativa, entre su nivel y el ingreso promedio de las regiones, departamentos, municipios y unidades comuneras”*. Una muestra de esto es el patrón de la distribución de propiedad relativa, cuyo grueso lo encontramos en el área que conforman las ciudades de Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín. Lo interesante de estos datos es que en 1912 ya se habían evidenciado diferencias regionales similares, tomando como base el analfabetismo, y que han perdurado hasta nuestros días, quizás sufriendo algunos cambios propios de la evolución social (Sánchez, Op. Cit.).

No tener en cuenta la calidad de la enseñanza en el análisis de la relación escolaridad-crecimiento económico, es un desacierto enorme por no considerar un factor determinante en la inequidad regional. Existe mayor grado de correlación entre las pruebas saber 11, en matemática y lenguaje, y las necesidades básicas insatisfechas, que utilizando como primera

variable los años de escolaridad. Este hallazgo sugiere que los esfuerzos para superar la inequidad regional se dirijan paralelamente, tanto a cobertura como a calidad (Sánchez, Op. Cit.).

En un estudio realizado por FEDESARROLLO (2014:2) se observa que la tercera parte de la población vive en la pobreza, además que el país se mantiene como uno de los más desiguales de América Latina. Esta situación se explica por varios factores, entre los cuales se desataca *“la escasa capacidad del sistema educativo para incrementar la acumulación de capital humano y promover la movilidad social.*

Sostiene este estudio que una de las brechas sociales en educación se encuentra muy ligada a las condiciones de pobreza, debido a que esto representa menos años de escolaridad promedio para las personas de menores ingresos.

Pero es necesario revisar los datos del servicio educativo, desde el punto de vista regional, para evaluar los niveles de inequidad regional y que pueden ser correlativos con los niveles de credibilidad entre las regiones. Para este cometido revisamos las cifras aportadas por Cortes & Vargas (2012), quienes utilizando los indicadores analfabetismo, cobertura bruta de la educación media y desempeño en las pruebas saber 11, advierten que “existen grandes diferencias regionales en el primer factor. Respecto a la cobertura para educación media, la situación es similar; mientras que el análisis de los resultados de las pruebas nacionales muestra una diferencia aún más marcada que para entre las regiones y los establecimientos educativos”.

Este análisis muestra que los niveles más altos de analfabetismo se encuentran en la Costa Atlántica y Chocó, donde La Guajira, por ejemplo, tiene el nivel más alto de analfabetismo del país, 28 % de la población mayor a 10 años, al igual que los departamentos petroleros de Casanare y Arauca.

Otro dato interesante y que muestra las disparidades regionales en materia educativa, es la Cobertura en Educación media. Los departamentos con mayor cobertura en este nivel educativo son Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander. En la costa Atlántica, Sucre presenta una cobertura relativamente alta. En La otra cara de la moneda están los llanos orientales y la Amazonía, aunque también se destacan Cauca, Chocó y La Guajira por sus bajos niveles de cobertura en educación media.

El más bajo rendimiento en la prueba saber 11, se concentran en los departamentos que conforman la región Amazónica, los llanos orientales, la costa atlántica y Chocó. Nariño, Norte de Santander, Huila y Quindío presentan un buen desempeño en estas pruebas.

Nos atrevemos a exponer como causas que mantienen esta situación de inequidad regional en el tema educativo, las planteadas por Andrés Sánchez (2014), para la superación del rezago en el que se encuentra la región caribe en el aspecto educativo. La primera de ellas es el analfabetismo, que al año 2008, solo en la región caribe alcanzaba el 11,6% de la población. El otro factor lo constituye la permanencia del estudiante en los establecimientos educativos, cuyo tiempo es menor por la deficiencia en infraestructura que presentan las regiones más rezagadas.

El bajo nivel de capacitación docente se advierte como otro de los aspectos negativos que explican la desigualdad regional. La capacitación es mejor en zonas urbanas, que en las rurales y es mejor en la Región Andina, sobretudo en el área formada entre Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá y la diferencia es grande respecto de la Costa Caribe y Pacífica.

La importancia de este aspecto es reafirmada por el estudio realizado por Galvis & Bonilla (2011), quienes concluyen que son innegables las ventajas que tienen los estudiantes de algunas regiones, sobre los de otras, por el acceso que tienen a docentes con mejor preparación. Otro valioso hallazgo es la identificación de las características socio-demográficas de los municipios donde se ubican los establecimientos educativos, como un elemento ligado a la mejor preparación con estudios de postgrados; al igual que el tipo de institución educativa se encuentra ligada a mejores docentes con formación pedagógica.

Finalmente, se propone como causa de inequidad la brecha del rendimiento académico entre las minorías étnica y el resto, teniendo en cuenta que en algunas regiones, sobre todo las que muestran insatisfacción en el desempeño, tienen una población afro descendiente o indígena más alta. Solo en la región caribe más de la quinta parte de la población pertenece a estos dos grupos étnicos.

En el tema educativo se evidencia que no es homogéneo en todo el territorio nacional y que existen unas diferencias bien marcadas entre las distintas regiones e incluso entre los territorios, dependiendo si su característica es urbana o rural.

El nivel de ingresos no es ajeno a esta situación. El estudio adelantado por Cortes & Vargas (2012), tiene la virtud de haber identificado las grandes diferencias regionales



existentes en Colombia, sobretodo en aspectos como el económico, más precisamente el PIB per cápita. De ellos se observa que los departamentos que tienen el PIB más bajo se encuentran en la Costa Pacífica, la Costa atlántica y la Amazonía.

En el otro extremo; es decir, los que tienen el PIB per cápita más alto se encuentran en la Región Andina, la excepción de la región pacífica Valle del Cauca y los departamentos petroleros de los llanos orientales. Las rentas de la minería y el petróleo han llevado a que en la década del 90, Arauca tenga el PIB más alto, por encima del de la Capital del país, puesto que veinte años después vino a ser ocupado por Casanare, situación que se ha mantenido durante todos estos años; sin embargo, eso no ha significado mayor calidad de vida para los habitantes de esos departamentos. Santander y Meta, por su parte han superado en producción a los departamentos de Antioquia y Valle de los 90'.

La extrema diferencia entre el PIB del departamento con mayor riqueza y el de menor, ha llevado a comparar a Casanare con Arabia Saudita y a Vaupés con Moldova. Entre los departamentos con PIB o tasa crecimiento más alto, a excepción del Cesar por su tasa de crecimiento, no se encuentra otro de la Costa Atlántica.

En el mapa de gravitación económica que grafica esta situación planteada por Cortes & Vargas (2012), se observa que los departamentos más cercanos a las cuatro ciudades que constituyen los cuatro mercados principales: Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, son Bogotá, Antioquia, Valle, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Los económicamente más aislados son los de la Amazonía, Vichada y Guainía, destacando que el departamento del Atlántico no está entre los más cercanos a pesar de que Barranquilla está en uno de los mercados de referencia.

Otro dato pertinente por el tema que abordamos es el índice de ruralidad que al observar el mapa del Informe del Desarrollo Humano, muestra la fuerte relación entre el PIB y la ruralidad. Los departamentos con mayor índice están en la Amazonía y los llanos orientales y los menos rurales en el centro del país.

Desde el punto de vista económico también se pueden evidenciar algunas disparidades entre las regiones del país, que también fueron advertidas por el lado educativo y que ya veremos cómo pueden incidir en la credibilidad institucional, más específicamente en el sistema de justicia.

## **5. Las características territoriales y las diferencias sociológicas regionales**

Nos introducimos en este tópico con una muy válida comparación realizada por el profesor Edgar Moncayo (2002), para referirse a las diferencias regionales existentes entre los países de diversas latitudes, más específicamente, el caso de Italia. En este país se observa una prosperidad de las regiones Centro-Norte que contrasta con el rezago en el que se encuentran las del sur.

Motivo de este distanciamiento desde el punto de vista de la riqueza es explicado por este autor, a partir de las instituciones, el grado de confianza entre los actores sociales de una comunidad y el grado de asociatividad. Pero además plantea otros elementos que determinan la facilidad para el surgimiento y mejor desarrollo de los anteriores.

Se distinguen entonces cuatro formas básicas de capital social, entre las cuales se encuentra el territorio, con todos los recursos naturales con que cuenta. Hoy día es imposible dejar de lado el capital natural, de cuyo desarrollo teórico se ha empezado a hablar de desarrollo sostenible y que remite a la dependencia entre los sistemas socioeconómicos y ecológicos, que determinan las posibilidades de desarrollo de ambos (Moncayo, 2002).

De estos planteamientos surge la idea del enfoque biorregional que enlaza la garantía del suministro de recursos naturales y servicios ambientales esenciales para la supervivencia de la comunidad con el adecuado aprovechamiento económico de dichos recursos.

Nos permitimos transcribir la descripción de biorregión acuñada por Boiser (citado por Moncayo, 2002:32).

Una región en cuya estructura sistémica hay un elemento de carácter ecológico que sobredetermina o que condiciona la naturaleza o el funcionamiento regional, por ejemplo, determina la flora, la fauna, el modo de producción, las relaciones sociales, los bienes y servicios producidos y la forma de inserción externa de la región, incluso su cultura.

La pertinencia de esta idea la corroboramos con el trabajo de la profesora María Cuellar (2000), en el que vamos a observar las diferencias regionales más significativas para el caso colombiano y que a continuación traemos los extractos mayormente relacionados con nuestro estudio.

Analizando la percepción de la importancia que dan los colombianos al país y a la región encontramos por ejemplo, que le dan preponderancia al país sobre la región, cuando se vive un regionalismo más marcado. Esta primacía no es homogénea en todas las regiones y en la única zona donde se impone la región sobre el país, es en la región pacífica. No obstante lo anterior, al confrontarlo con la percepción de países de otras latitudes, encontramos que Colombia es altamente regionalista en el contexto internacional.

Estas proposiciones se manifiestan en el alto grado de satisfacción con el gobierno local respecto del nacional. Estos datos analizados a la luz del nivel de ingreso señalan que la satisfacción con el gobierno local está ligada con un alto nivel de ingresos y cuando el nivel de ingresos es bajo, aumenta el grado de satisfacción con el gobierno nacional. Del grado de satisfacción con los gobiernos locales se puede deducir que se afianzan las condiciones para un proceso de más descentralización.

La sociedad plural que surge de la coexistencia en el territorio colombiano de más de sesenta etnias, con tradiciones y culturas que difieren considerablemente entre regiones, idiomas diversos, al igual que los grados de aculturación, dan lugar a una organización de la economía también plural, conocimientos y experiencias propias en la adaptación a los ecosistemas, hábitos de consumo, política, vida familiar y religiosa. Las mayores diferencias entre las regiones surgen en lo relacionado con la familia y con la posición de la mujer en el hogar (Cuellar, 2000).

Empecemos analizando el tamaño de la familia. En la zona central se observa un promedio en el número de hijos más elevado. Su causa es la valoración de la familia numerosa sobre la prosperidad económica y la organización de la economía agraria alrededor de las empresas familiares numerosas. En segundo lugar, encontramos los antiguos territorios nacionales, o municipios caracterizados por un alto grado de violencia, y la zona atlántica. En la zona donde menos se tiene y se desea tener hijos es en la capital de la república.

La importancia atribuida a la familia es bastante alta y similar entre regiones, excepto en las zonas de violencia con una ligera variación negativa, que tiene como causas la colonización, reciente, y la ausencia de estructuras sólidas y estables que regulen la vida pública en el plano social, económico, político y en lo relativo a su integridad personal.

La familia concentrada en grupos bi-generacionales es otro de los factores analizados, que muestra una correlación con la elevada proporción de familias que vive con hijos de terceros. En la zona atlántica y pacífica predomina la familia extensa, mientras que en el otro extremo se encuentran la zona oriental y la central, donde predomina la familia nuclear.

La jerarquía entre padres e hijos es otro de los factores considerados en nuestro análisis. La zona oriental existe la más alta y marcada dependencia de hijos y padres, en Bogotá es bastante reducido y la zona oriental se reduce considerablemente. Especialmente en los Santanderes la familia está estructurada en torno al respeto hacia el hombre y su posición y estatus patriarcal.

En Colombia, el Estado solo ha reemplazado parcialmente las funciones familiares que surgen con la modernidad. La familia es una institución que continua siendo fundamental para la supervivencia y la realización personal. Por esta razón, los colombianos buscan reducir los riesgos propios del devenir social apegados a la unión y confianza en la familia, al tiempo que desconfían del resto de la sociedad (Cuellar, Op. Cit). Las relaciones jerarquizadas, entre padres e hijos, fuertes y arraigadas superan ampliamente las de otros países.

Los vínculos afectivos tienen un menor peso que la conveniencia o los vínculos de sangre, respecto a otros países. La carencia de oportunidades lleva a los colombianos a buscar seguridad dentro de la familia, con una jerarquización y donde predomina la familia extensa y alrededor de la mujer. “En el ámbito familiar es donde más se expresa la pluriformidad cultural del país” (Cuellar, Op. Cit.: 359). Es indudable la regionalidad del país desde el plano sociológico, cuando encontramos, por ejemplo, que en lo relacionado con el amor o respeto hacia los padres o la importancia del matrimonio, en costa atlántica predomina la informalidad en las relaciones de pareja y procreativas, pero el concepto de familia y responsabilidad paterna están bien arraigadas. En la pacífica se encuentra también una informalidad, pero por el contrario acompañada de irresponsabilidad con los hijos. En la región oriental las relaciones de dependencia de padres e hijos y de la mujer están más arraigadas, caracterizadas por la dependencia de la figura masculina. En la central, imperan sociedades tradicionales. La madre está más considerada para las labores domésticas y la

atención de la familia. En la Capital se impone la formalidad y la independencia afectiva y laboral de la mujer (Cuellar, Op. Cit.) .

Una propuesta que transcribimos literalmente quizás por significar el sentido en que, casi que parafraseándola, la hace la profesora Margarita Mercedes Cuellar (2000), al indicar el viraje de la política pública hacia la familia con una visión más integral, puesto que esta toca aspectos de la vida nacional muchos más diversos de los tenidos en cuenta y que hace que las acciones emprendidas se tornen inadecuadas e insuficientes:

Es preciso que la sociedad evolucione hacia la consolidación de una familia acorde con el desarrollo histórico, antes de que se vea aún más atropellada en sus principios esenciales por cuenta de los cambios que se producen con el avance hacia la modernidad. Es urgente el diseño y la adopción de políticas que tengan como objetivo la familia como tal e incorporen las consecuencias de los procesos demográficos y la participación de ambos géneros en los mercados laborales. La sociedad colombiana es eminentemente joven, lo que facilita ajustar normas, en particular las de seguridad social, posibilidad que se dificulta en extremo cuando la población envejece. (Cuellar, Op. Cit: 359).

La profesora Concepción Foronda Robles (2012), se suma a aquellos académicos que sostienen argumentos sobre la fuerte relación entre capital social y contexto geográfico. El capital social, observado desde el punto de vista territorial, involucra tanto aspectos individuales como colectivos. La confianza, al ser un elemento del capital social territorial se produce por mecanismos que están relacionados con el espacio geográfico.

El capital social ha despertado gran interés, al ser analizado desde la geografía, por los buenos resultados de los procesos de desarrollo económico territoriales que se pueden conseguir. Hasta el momento se han identificado indicios para afirmar que si bien es cierto no se puede probar la relación de determinación entre el territorio y otras formas de capital social, si puede mejorar la eficiencia de otras formas de capital, como por ejemplo el humano, el financiero, el físico o el ambiental. Añadirle al territorio componentes como la confianza social, marcos normativos y de valores estables, instituciones eficaces significaría mejorar el potencial de las relaciones sociales. (Krugman, 1997; 2010; Powell *et al.*, 2002; Bay-Larsen, 2010, citado por Foronda-Robles, 2012).

Vemos una validez indudable de los planteamientos de esta autora, al afirmar que si se toma el capital social como variable explicativa de los procesos socioeconómicos se incorporarían elementos de tipo social e institucional a los clásicos análisis económicos, al igual que el conocimiento de los vínculos y las interacciones entre la ciudadanía y los órganos de gestión. Está bien justificada la idea de que el simple modelo económico no basta para dar origen a las relaciones socioeconómicas, puesto que su integración depende del tejido social y cultural. Todas estas relaciones dependen de factores internos y externos. Los primeros se refieren a la cultura, la sociedad y la economía local y los otros, al efecto que los mercados y la sociedad global tienen sobre el territorio (Foronda-Robles, 2012).

Las posturas surgidas desde este nuevo enfoque caracterizan el territorio como un elemento explicativo esencial de los procesos de desarrollo (Moncayo, 2004). Los nuevos enfoques de política pública territorial consideran a los territorios como una construcción social a partir de relaciones de poder y con potencialidades para el desarrollo (Foronda-Robles, 2012).

El sentido de pertenencia territorial surge a partir del territorio. Este fenómeno se explica porque este último es el resultado de un proceso de construcción social en el que se combinan recursos naturales, flujos de información, infraestructura, intereses y símbolos culturales. El territorio una vez que fusiona estos elementos, toma un carácter superior que se refleja en su fuerza de cohesión y la identidad que genera entre quienes de él hacen parte (Foronda-Robles, 2012).

La importancia del territorio en este estudio sobre credibilidad institucional radica en que es el soporte de toda acción más allá de un simple espacio físico, cuyo carácter ha sido realizado por la geografía y a partir de ese viraje se le da dinamismo, donde; viven personas con problemáticas particulares y donde hay intereses en juego. Todos esos factores tienen incidencia en el proceso de creación de credibilidad institucional y de confianza particular y social y, por ende, en la percepción sobre ellas y los niveles en que podemos encontrarlas en las distintas regiones naturales de Colombia.

## CAPÍTULO II

### MODELO METODOLÓGICO

#### 1. Procesamiento de Datos

En este apartado se explican los métodos utilizados para el procesamiento de los datos. En primer lugar, se realiza un análisis de regresión lineal múltiple tomando como variable dependiente la credibilidad en el sistema judicial y como variables independientes; la independencia judicial y la forma de ingreso de los jueces a la judicatura. Posteriormente, se muestran diferentes pruebas donde el interés es determinar que variables dependientes pueden explicar la credibilidad del Sistema Judicial y cuales están asociadas de las variables de identificación del cuestionario utilizado<sup>1</sup>. Como estrategia para determinar la asociación entre las variables objeto del estudio, se utilizó, adicionalmente, la técnica de correspondencia y la técnica de Árbol de decisión.

Se presentan las estadísticas resumen, promedio y desviación típica o estándar, para los diferentes ítems que evalúan la credibilidad del Sistema Judicial en Colombia.

Por último, se utilizó el procedimiento de Análisis Factorial exploratorio con el fin de identificar los factores que sobresalen en la credibilidad del Sistema Judicial colombiano posibilitando una mejor interpretación<sup>2</sup>.

#### **1.1. Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Variables credibilidad en el Sistema Judicial por país y las variables independientes independencia judicial (%) y forma de ingreso de los jueces (Elección directa, elección indirecta o de carrera judicial).**

Con los datos obtenidos del cuestionario se construyó la tabla 1 la cual muestra la variable dependiente credibilidad en el sistema judicial por país y las variables independientes independencia judicial (%) y forma de elección (Directa, indirecta o de carrera).

Este modelo persigue además hacernos una idea de los índices de credibilidad en los Sistemas de Justicia de algunos países a partir de la percepción de los ciudadanos, algunos

---

<sup>1</sup> Se encuentra en el enlace: [http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/2014\\_Colombia\\_Cuestionario\\_W.pdf](http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/2014_Colombia_Cuestionario_W.pdf)

<sup>2</sup> Todas las pruebas se realizaron con el software SPSS en su versión 22.

de esos estados comparten parte de su historia con el nuestro, caso Ecuador y Bolivia, otros han tenido sus propias experiencias en la evolución del sistema judicial.

**Tabla 1.**

Indicadores sobre percepción de la justicia según país y su forma de elección. Año 2013.

| País           | Credibilidad Sistema Judicial (%) | Independencia Judicial (1-7) | Forma de Elección |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| BOLIVIA        | 21,80                             | 3,10                         | DIRECTA           |
| ESTADOS UNIDOS | 35,50                             | 5,00                         | DIRECTA           |
| CANADA         | 58,10                             | 6,20                         | INDIRECTA         |
| REINO UNIDO    | 52,00                             | 6,20                         | INDIRECTA         |
| ARGENTINA      | 34,40                             | 2,40                         | CARRERA           |
| ECUADOR        | 36,10                             | 3,20                         | CARRERA           |
| HONDURAS       | 37,40                             | 3,00                         | CARRERA           |
| MEXICO         | 31,70                             | 3,30                         | CARRERA           |
| NICARAGUA      | 48,00                             | 2,60                         | CARRERA           |
| PARAGUAY       | 28,50                             | 1,70                         | CARRERA           |

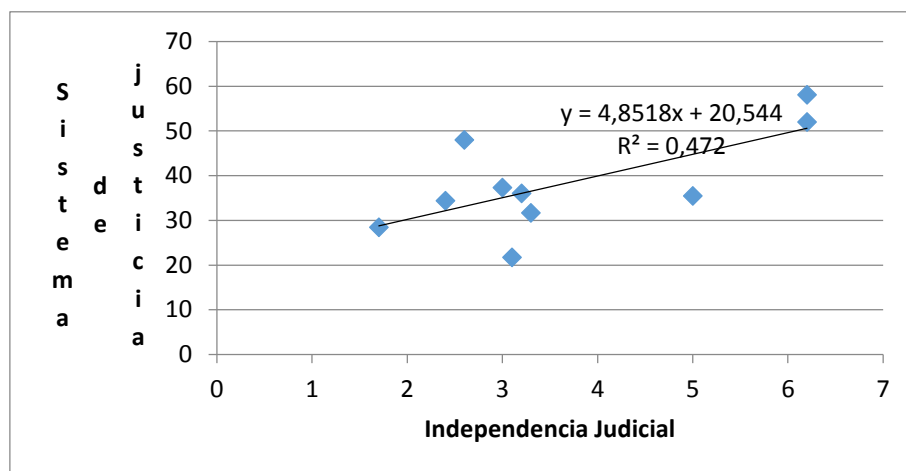
Fuente: The AmericasBarometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP), [www.LapopSurveys.org](http://www.LapopSurveys.org), The Global Competitiveness Report 2013-2014, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GlobalCompetitivenessReport\\_2013-14.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf) y Constituciones Políticas y leyes reglamentarias del ingreso a la judicatura de países observados.

La descripción de los datos nos permite observar que los países donde la comunidad tiene una mejor percepción sobre su sistema judicial son en su orden: Canadá (58,10%) y Reino Unido (52,00%), por el contrario, los de menos credibilidad fueron: Bolivia (21,80%), Paraguay (28,50%) y México (31,70%).

Con el fin de identificar la relación entre las variables cuantitativas del modelo propuesto Credibilidad del Sistema Judicial (%) e Independencia Judicial (1-7), se construyó el siguiente gráfico de dispersión, donde el eje X corresponde a la independencia judicial (IJ) y el Y a la credibilidad del Sistema Judicial (SJ).

El procedimiento consistió en ubicar en el eje Y de un plano cartesiano los valores de la columna credibilidad del Sistema Judicial y en el eje X los correspondientes a la Independencia Judicial. En el siguiente gráfico podemos observar la ecuación de la pendiente y el coeficiente de determinación. Aclaramos que cada punto corresponde a las parejas ordenadas de los índices de credibilidad del Sistema Judicial y de Independencia Judicial. Por ejemplo, la recta inicia en el punto (1,7; 28,5) correspondiente a Paraguay y termina en el punto (6,2; 52) que describe los índices del Reino Unido.





**Figura 1: Relación entre la credibilidad en el Sistema y la Independencia Judicial.**

La figura muestra una leve tendencia ascendente lineal, por lo tanto, es prudente realizar la técnica de regresión lineal, además, se inserta en el modelo la variable cualitativa forma de elección. El modelo planteado es:

$$\text{Credibilidad del Sistema de Justicia} = b_0 + b_1 \text{ Independencia Judicial} + b_2 \text{ Forma indirecta} + b_3 \text{ Carrera.}$$

Es importante mencionar que dado que una de las variables es cualitativa, se procedió a recodificar dicha variable y trabajar con variables Dummy, ellas consisten en convertirlas en ceros y unos y poder así interpretar los coeficientes calculados.

Luego de ejecutar el procedimiento, se obtuvo la tabla 2:

**Tabla 2.**

Coefficientes de regresión con variables Dummy.

| Coeficientes               |                                |            |                          |       |      |
|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-------|------|
| Modelo                     | Coeficientes no estandarizados |            | Coeficientes tipificados | t     | Sig. |
|                            | B                              | Error típ. | Beta                     |       |      |
| 1 (Constante)              | 8,782                          | 14,475     |                          | ,607  | ,566 |
| Independencia Judicial (%) | 4,906                          | 3,393      | ,695                     | 1,446 | ,198 |
| Forma indirecta            | 15,853                         | 9,731      | ,601                     | 1,629 | ,154 |
| Carrera                    | 13,989                         | 6,974      | ,649                     | 2,006 | ,092 |

a. Variable dependiente: credibilidad del Sistema de Justicia.

Teniendo en cuenta los valores de la última columna de la tabla, donde Sig. en todos los casos es mayor de 0.05; se puede afirmar que no explican significativamente la credibilidad del Sistema Judicial, por lo tanto, se eliminó la variable forma de elección del modelo original.

La significancia, representada en la tabla por la abreviatura Sig., es criterio para tomar la decisión de aceptar o no aceptar una relación estadística o hipótesis surge del concepto de la confiabilidad de una investigación. Generalmente, las investigaciones se desarrollan con una confiabilidad del 95%, eso implica que el complemento para llegar al 100% es un 5% que es lo mismo que 0,05, valor tipo de Sig.; es decir, si hay una confiabilidad del 95% se toma el complemento como un punto de referencia para tomar la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis.

En el caso nuestro trabajamos con ese índice de confiabilidad, valor con el cual se encuentra parametrizado el software SPSS. El software lo denomina Sig., como abreviatura de significancia estadística. Cuando el Sig. tiene el valor de 0,00 traduce que la decisión que se tome está avalada por una confiabilidad del 99%. Por lo anterior, todas las pruebas de este estudio que arrojen valores Sig. menores de 0,05 traducen que se acepta la hipótesis alterna, que hay significancia o que hay correlación.

Por lo tanto, se volvió a correr el siguiente modelo.

$$\text{Credibilidad del Sistema de Justicia} = b_0 + b_1 \text{ Independencia Judicial}$$

En este caso  $b_0$ , llamado también el intercepto o la constante, no es otra cosa que el valor que asume la credibilidad del Sistema Judicial (Y) cuando la Independencia en el Sistema Judicial (X) es 0. La  $b_1$  es el valor de la pendiente.

En el gráfico 1 se observa un coeficiente de determinación ( $R^2$ ) fue de 0,472 lo que indica que el 47,2% de los cambios que se presentan en la percepción sobre la credibilidad del Sistema Judicial, son explicadas por los cambios en el indicador de la independencia judicial. Si aplicamos la raíz cuadrada al coeficiente de determinación obtenemos un coeficiente de correlación (R) de 0,687, lo cual indica una asociación moderada entre las dos variables. La teoría estadística dice que cuando el coeficiente de correlación supera 0,80 es muy fuerte la correlación entre variables, será moderada en 0,70 y a medida que va disminuyendo será considerada más débil.

El modelo con los coeficientes calculados es:

Credibilidad del Sistema de Justicia = 20,544 + 4,852 Independencia Judicial.

**Tabla 3.**

Coeficiente de regresión entre credibilidad del Sistema Judicial e Independencia Judicial.

|                            | Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95,0% | Superior 95,0% |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Intercepción               | 20,5437402   | 7,19022154   | 2,85717764    | 0,02124336   | 3,9630596    | 37,12442082  | 3,963059599    | 37,12442082    |
| Independencia Judicial (%) | 4,85184191   | 1,81447487   | 2,67396479    | 0,02818846   | 0,66765536   | 9,036028447  | 0,667655363    | 9,036028447    |

Ambos coeficientes son estadísticamente significativos, ambos son menores de 0,05 (0,021, 0,028).

La diferencia entre los datos iniciales de credibilidad del Sistema Judicial y los resultados del modelo es lo que se conoce como residuales. Sobre ellos se realizaron pruebas de normalidad y aleatoriedad. El modelo debe cumplir con las condiciones de normalidad y con la aleatoriedad, para lo cual partimos de la hipótesis nula “*los datos se comportan normales*” y la hipótesis alterna “*datos no se comportan normales*”. Al hacer las pruebas de normalidad encontramos que la significancia arroja un valor de 0,848, superior a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se concluye que se distribuyen normales.

Por otro lado, realizamos las pruebas para evaluar su aleatoriedad, partiendo de la hipótesis nula “*los datos son aleatorios*” y la hipótesis alterna “*los datos no son aleatorios*”. Los resultados indican que Sig. arroja un valor de 0,737, superior a 0.05, lo cual confirma la hipótesis nula “*los datos son aleatorios*”, lo que permite concluir que se distribuyen normales y además, son aleatorios, indicando entonces que el modelo es adecuado.

Se estima que la credibilidad del Sistema Judicial se incremente en aproximadamente cinco puntos (4,85) cuando el índice de independencia se incrementa en una unidad, por lo tanto, se evidencia una relación directa entre ambas variables.

Teniendo clara la incidencia de la independencia judicial en la credibilidad del Sistema Judicial, se procede a realizar las pruebas con las otras variables independientes identificadas para determinar la forma en que estas pueden incidir en la credibilidad del Sistema Judicial, utilizando algunas técnicas estadísticas aplicadas como seguidamente se expone.

## 1.2. Modelo de Regresión Lineal Múltiple variables credibilidad del sistema judicial por país y las variables independientes: Independencia Judicial, educación, ingresos hogar, regiones y respeto a las instituciones.

Para correr ésta regresión, se utilizó la base de datos ya referenciada y que consta de 1499 registros, por lo tanto, es posible considerar las variables Dummy; ingresos hogar, para lo cual se crearon 16 variables también llamadas artificiales y la Dummy; estrato primario (Regiones), para la cual se crearon 6 nuevas variables.

En el primer caso, la variable de referencia fue personas que no tienen ningún ingreso, mientras que para la segunda, se consideró la región del Atlántico como la de referencia. El modelo a ejecuta de manera general se puede expresar así:

$$SJ = \text{educación} + \text{ingresos hogar} + \text{estrato primario} + \text{respeto a las instituciones}$$

**Tabla 4.**

Modelo variables Dummy.

| Resumen del modelo   |                   |            |                     |                                 |               |
|--|-------------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Modelo   | R                 | R cuadrado | R cuadrado ajustado | Error estándar de la estimación | Durbin-Watson |
| 1  | ,381 <sup>a</sup> | ,145       | ,131                | 1,646                           | 2,155         |
| a. Predictores: (Constante), Ingreso16, Dummy Central, Respeto a las instituciones, Ingreso4, Ingreso5, Ingreso2, Ingreso3, Dummy Territorios Nacionales, Ingreso6, Ingreso11, Ingreso1, Ingreso10, Ingreso15, Dummy Pacífica, Ingreso13, Años de educación, Ingreso12, Dummy Oriental, Ingreso9, Ingreso14, Dummy Bogotá, Ingreso en el hogar |                   |            |                     |                                 |               |
| b. Variable dependiente: Credibilidad el sistema judicial  |                   |            |                     |                                 |               |

Luego de ejecutar el modelo con las Dummy, se obtuvo que el Durbin-Watson dio un valor de 2,15, indicando que los residuos están incorrelacionados y por lo tanto cumplen un supuesto importante en el modelo de regresión múltiple.

El coeficiente de determinación corregido, se entiende como el ajuste al coeficiente de determinación normal para no inflar de forma ficticia el coeficiente de determinación con la inclusión de variables. En este caso se puede concluir que el 13,1% de los cambios en el Sistema de Justicia (JC) son explicadas por las demás variables consideradas en el modelo. Para verificar si el modelo es significativo revisamos el ANOVA.

**Tabla 5.**

ANOVA

| ANOVA <sup>a</sup>   |           |                   |      |                  |        |                   |
|--|-----------|-------------------|------|------------------|--------|-------------------|
| Modelo   |           | Suma de cuadrados | gl   | Media cuadrática | F      | Sig.              |
| 1  | Regresión | 610,891           | 22   | 27,768           | 10,251 | ,000 <sup>b</sup> |
|  | Residuo   | 3597,155          | 1328 | 2,709            |        |                   |
|  | Total     | 4208,046          | 1350 |                  |        |                   |
| a. Variable dependiente: Credibilidad del sistema judicial   |           |                   |      |                  |        |                   |
| b. Predictores: (Constante), Ingreso16, Dummy Central, Respeto a las instituciones, Ingreso4, Ingreso5, Ingreso2, Ingreso3, Dummy Territorios Nacionales, Ingreso6, Ingreso11, Ingreso1, Ingreso10, Ingreso15, Dummy Pacífica, Ingreso13, Años de educación, Ingreso12, Dummy Oriental, Ingreso9, Ingreso14, Dummy Bogotá, Ingreso en el hogar |           |                   |      |                  |        |                   |

Evidenciamos allí que el valor del Sig=0,000 del ANOVA, muestra que el modelo es significativo. Los coeficientes de las variables se presentan en la siguiente tabla.

**Tabla 6.**

Coeficientes de regresión con variables Dummy modelo múltiple.

| Modelo |                              | Coeficientes no estandarizados |            | Coeficientes tipificados | T      | Sig. |
|--------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------|------|
|        |                              | B                              | Error típ. | Beta                     |        |      |
| 1      | (Constante)                  | 2,828                          | ,222       |                          | 12,758 | ,000 |
|        | Respeto a las instituciones  | ,298                           | ,024       | ,323                     | 12,579 | ,000 |
|        | Años de educación            | -,038                          | ,012       | -,087                    | -3,079 | ,002 |
|        | Dummy Bogotá                 | -,507                          | ,153       | -,109                    | -3,326 | ,001 |
|        | Dummy Central                | -,375                          | ,138       | -,090                    | -2,715 | ,007 |
|        | Dummy Oriental               | -,252                          | ,146       | -,055                    | -1,728 | ,084 |
|        | Dummy Pacífica               | -,226                          | ,147       | -,049                    | -1,536 | ,125 |
|        | Dummy Territorios Nacionales | -,010                          | ,275       | -,001                    | -,038  | ,970 |
|        | Ingreso1                     | -,064                          | ,218       | -,009                    | -,296  | ,768 |
|        | Ingreso2                     | ,185                           | ,226       | ,024                     | ,819   | ,413 |
|        | Ingreso3                     | ,161                           | ,226       | ,021                     | ,712   | ,476 |
|        | Ingreso4                     | ,430                           | ,298       | ,040                     | 1,442  | ,150 |
|        | Ingreso5                     | -,119                          | ,246       | -,014                    | -,484  | ,629 |
|        | Ingreso6                     | -,190                          | ,223       | -,025                    | -,850  | ,395 |
|        | Ingreso9                     | -,051                          | ,202       | -,008                    | -,255  | ,799 |
|        | Ingreso10                    | ,069                           | ,217       | ,010                     | ,318   | ,751 |
|        | Ingreso11                    | -,697                          | ,223       | -,094                    | -3,129 | ,002 |
|        | Ingreso12                    | ,070                           | ,205       | ,011                     | ,338   | ,735 |
|        | Ingreso13                    | ,128                           | ,206       | ,019                     | ,623   | ,533 |
|        | Ingreso14                    | -,087                          | ,205       | -,014                    | -,423  | ,672 |
|        | Ingreso15                    | -,041                          | ,221       | -,006                    | -,188  | ,851 |
|        | Ingreso16                    | ,000                           | ,246       | ,000                     | -,001  | ,999 |

a. Variable dependiente: Confianza en el sistema judicial

En la tabla precedente, la columna de los Sig, refleja que variables influyen en los cambios en la credibilidad del Sistema Judicial. Se destaca que el Respeto a las instituciones y los años de educación son estadísticamente significativos y aportan a explicar la variable Sistema Judicial. Con respecto a la variable Dummy referente a Estrato Primario (Regiones), se encontró que Bogotá y la región Central son significativas, dado que en ambos casos, los coeficientes son negativos. Como la categoría base es la Atlántica, se puede afirmar que la proporción de credibilidad del Sistema Judicial en Bogotá es menor en 0,507 y en la región central también es menor en 0,375, con respecto a la Región Atlántica. Si bien en las otras regiones no se consideran significativas, Sig. mayor de 0,05, no se pueden eliminar del modelo, dado que hacen parte de la variable Estrato Primario (Regiones).

Con respecto a la variable ingreso, sólo una fue significativa y corresponde a la variable Dummy ingreso11, entre 810.001 – 960.000, con un Sig. de 0,002. Esto equivale a decir que se encontró diferencia en el indicador de la credibilidad del Sistema Judicial en las personas en éste rango de ingresos con respecto a los que se encuentran en otros rangos y casualmente los encuestados clasificados en un rango de ingresos inferior al 11 tienen una valoración menor de la credibilidad en el Sistema de Justicia.

### 1.3. Asociación de la credibilidad del sistema judicial según Género.

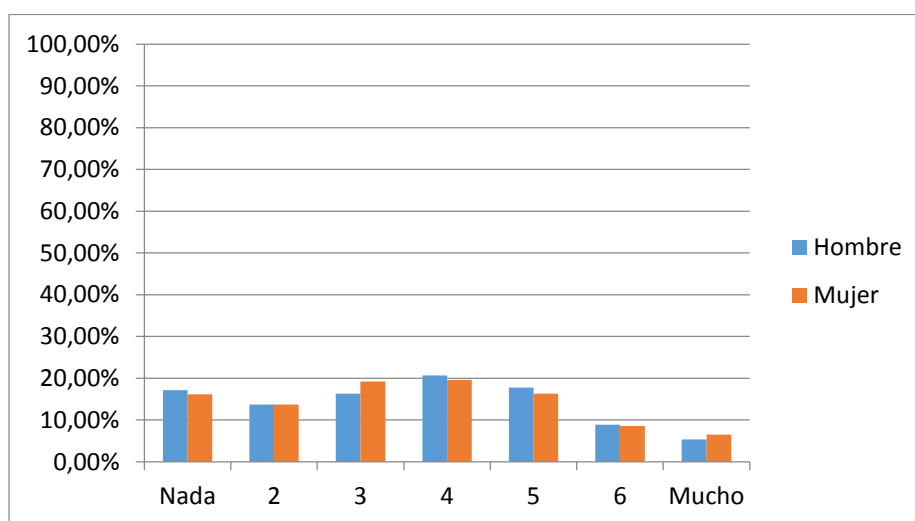
Se presentan resultados de variables que pueden estar asociadas con la variable Sistema de Justicia. Para ello, se utilizan diversas técnicas como las tablas cruzadas, el análisis de correspondencia simple y la técnica del Árbol.

**Tabla 7.**

Relación entre la credibilidad el sistema judicial y el género. Colombia 2014.

| Confianza en el sistema judicial | Género        |               | Total          |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                  | Hombre        | Mujer         |                |
| Nada                             | 128<br>17,2%  | 119<br>16,2%  | 247<br>16,7%   |
| 2                                | 102<br>13,7%  | 101<br>13,7%  | 203<br>13,7%   |
| 3                                | 121<br>16,3%  | 141<br>19,2%  | 262<br>17,7%   |
| 4                                | 154<br>20,7%  | 144<br>19,6%  | 298<br>20,1%   |
| 5                                | 132<br>17,8%  | 120<br>16,3%  | 252<br>17,0%   |
| 6                                | 66<br>8,9%    | 63<br>8,6%    | 129<br>8,7%    |
| Mucho                            | 40<br>5,4%    | 48<br>6,5%    | 88<br>5,9%     |
| Total                            | 743<br>100,0% | 736<br>100,0% | 1479<br>100,0% |

Se aprecia en la tabla anterior que la distribución por género se encuentran alrededor del 50% y es similar tanto hombres como mujeres. Con respecto a la credibilidad del Sistema Judicial, los menores porcentajes se encontraron en las dos categorías que avalan una buena credibilidad del sistema, es decir, el 5,9% de las personas predican mucha confianza del sistema y el 8,7%, se puede considerar que también lo califica con buena credibilidad. De otro lado, el 16,7% mencionan que no tiene nada de credibilidad y el 13,7% muy poca. La distribución correspondiente según género la podemos observar en el siguiente gráfico.



**Figura 2: Distribución porcentual de la credibilidad del sistema judicial según género. Colombia 2014.**

Se encontraron opiniones diversas en la comunidad, prueba de ello, es que las barras son similares para las primeras cinco categorías, disminuyendo un poco en las categorías superiores de mayor credibilidad en el sistema, éste comportamiento fue similar tanto para hombres como mujeres. Además, los mayores porcentajes estuvieron cerca del 20% y pertenecieron a lo que se puede considerar una credibilidad moderada en el sistema.

Esta prueba obedece al rol que desempeña la figura paterna o materna en las familias y que varía dependiendo de la región natural a la cual pertenezca. Al ver que el hombre o la mujer se constituye como la figura en torno a la cual gira la familia y que existe cierta heterogeneidad en los territorios naturales de Colombia, se intuyó que podía existir alguna variación en la percepción de credibilidad del Sistema de Justicia, lo cual ha sido descartado.

**Tabla 8.**

Resultados prueba Chi cuadrado con el SPSS, relación entre la credibilidad del Sistema Judicial y el género. Colombia 2014.

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 3,531 <sup>a</sup> | 6  | ,740                           |
| Razón de verosimilitudes     | 3,533              | 6  | ,740                           |
| Asociación lineal por lineal | ,031               | 1  | ,859                           |
| N de casos válidos           | 1479               |    |                                |

- a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
b. La frecuencia mínima esperada es 43,79.

El valor de la Chi Cuadrada fue de 3,531 con un valor de Sig de 0,740 mayor de 0,05, lo que indica que el género no está asociado con la opinión sobre la credibilidad del sistema judicial colombiano.

#### 1.4. Asociación entre la credibilidad del Sistema Judicial y Regiones Naturales.

Es importante determinar de qué manera la credibilidad del Sistema Judicial colombiano es percibida según las regiones del país, teniendo en cuenta la diversidad de cultura que tiene el país.

**Tabla 9.**

Asociación entre la credibilidad del sistema judicial y las regiones. Colombia 2014.

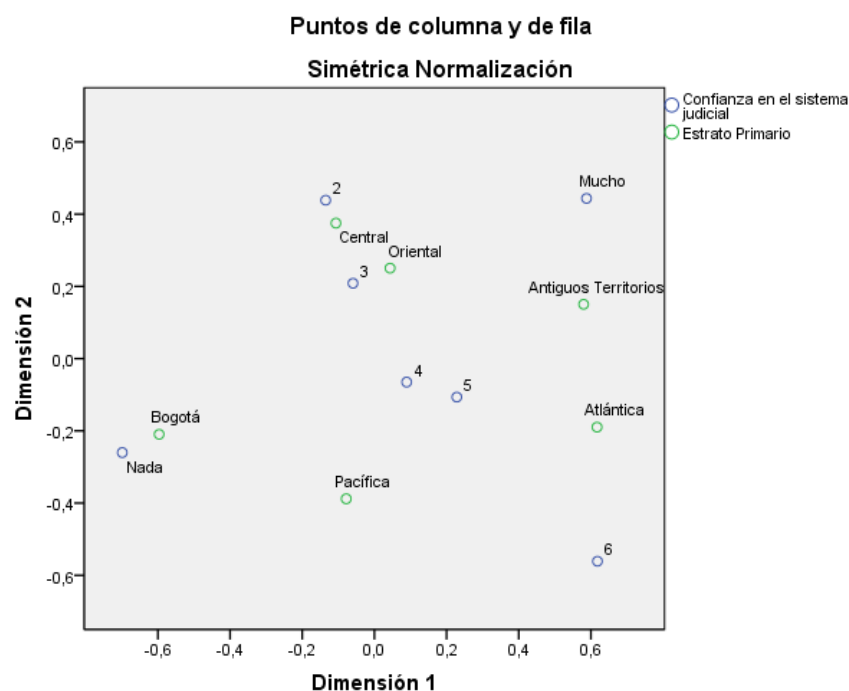
| Confianza en el sistema judicial | Estrato Primario |               |               |               |               |                                 | Total          |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  | Atlántica        | Bogotá        | Central       | Oriental      | Pacífica      | Antiguos Territorios Nacionales |                |
| Nada                             | 29<br>10,3%      | 63<br>24,4%   | 58<br>16,4%   | 42<br>15,1%   | 51<br>19,5%   | 4<br>8,9%                       | 247<br>16,7%   |
| 2                                | 34<br>12,1%      | 36<br>14,0%   | 54<br>15,3%   | 47<br>16,9%   | 28<br>10,7%   | 4<br>8,9%                       | 203<br>13,7%   |
| 3                                | 46<br>16,3%      | 43<br>16,7%   | 75<br>21,2%   | 44<br>15,8%   | 46<br>17,6%   | 8<br>17,8%                      | 262<br>17,7%   |
| 4                                | 60<br>21,3%      | 51<br>19,8%   | 68<br>19,2%   | 55<br>19,8%   | 53<br>20,2%   | 11<br>24,4%                     | 298<br>20,1%   |
| 5                                | 54<br>19,1%      | 41<br>15,9%   | 51<br>14,4%   | 51<br>18,3%   | 44<br>16,8%   | 11<br>24,4%                     | 252<br>17,0%   |
| 6                                | 38<br>13,5%      | 16<br>6,2%    | 24<br>6,8%    | 21<br>7,6%    | 27<br>10,3%   | 3<br>6,7%                       | 129<br>8,7%    |
| Mucho                            | 21<br>7,4%       | 8<br>3,1%     | 24<br>6,8%    | 18<br>6,5%    | 13<br>5,0%    | 4<br>8,9%                       | 88<br>5,9%     |
| Total                            | 282<br>100,0%    | 258<br>100,0% | 354<br>100,0% | 278<br>100,0% | 262<br>100,0% | 45<br>100,0%                    | 1479<br>100,0% |



Exceptuando los Antiguos Territorios Nacionales, en todas las demás regiones se obtuvo información que nos permite realizar apreciaciones válidas. Se destaca que en Bogotá es donde menos credibilidad se tiene en el sistema judicial, esto se deduce, al encontrar que el 24,4% de los que respondieron a la encuesta de esa zona, dicen no tener NADA de credibilidad en el sistema, además, tiene el menor porcentaje de personas que creen mucho en el sistema (3,1%). Por el contrario, las regiones Antiguos Territorios Nacionales y la Atlántica, es donde más credibilidad tienen los ciudadanos, prueba de ello, es los porcentajes más bajos en la no credibilidad en el sistema y los más altos en la credibilidad del mismo.

#### 1.4.1. Correspondencia Simple credibilidad del Sistema Judicial y Regiones.

Este análisis determina la posible asociación no sólo de las dos variables consideradas como lo hace la Chi Cuadrado, sino, que identifica la posible asociación entre las categorías de cada variable cualitativa.



**Figura 3: Mapa perceptual credibilidad del sistema judicial según región. Colombia 2014.**

En el mapa, se identifica claramente, que en Bogotá es donde se obtuvo menor credibilidad en el sistema, esto se deduce al observar que la categoría de NADA está muy cerca de Bogotá, con ese mismo raciocinio, la categoría MUCHO está más próximo a Antiguos

Territorios Nacionales, se identifica además, que para los usuarios, las regiones Central y oriental son percibidas de manera similar y con valoraciones de regular credibilidad en el sistema, están cerca de los valores 2 y 3. Las regiones Atlántica y Pacífica sin ser muy próximas entre ellas, si se sitúan a distancias similares de los valores 4 y 5 que se pueden considerar de buena credibilidad.

### **1.5. Asociación entre la credibilidad del Sistema Judicial Colombiano y el tamaño poblacional de las ciudades en Colombia.**

El tamaño es otra de las variables que pueden influir en la percepción de los colombianos sobre la credibilidad del sistema judicial, por esa razón se aborda el tema en éste apartado.

**Tabla 10.**

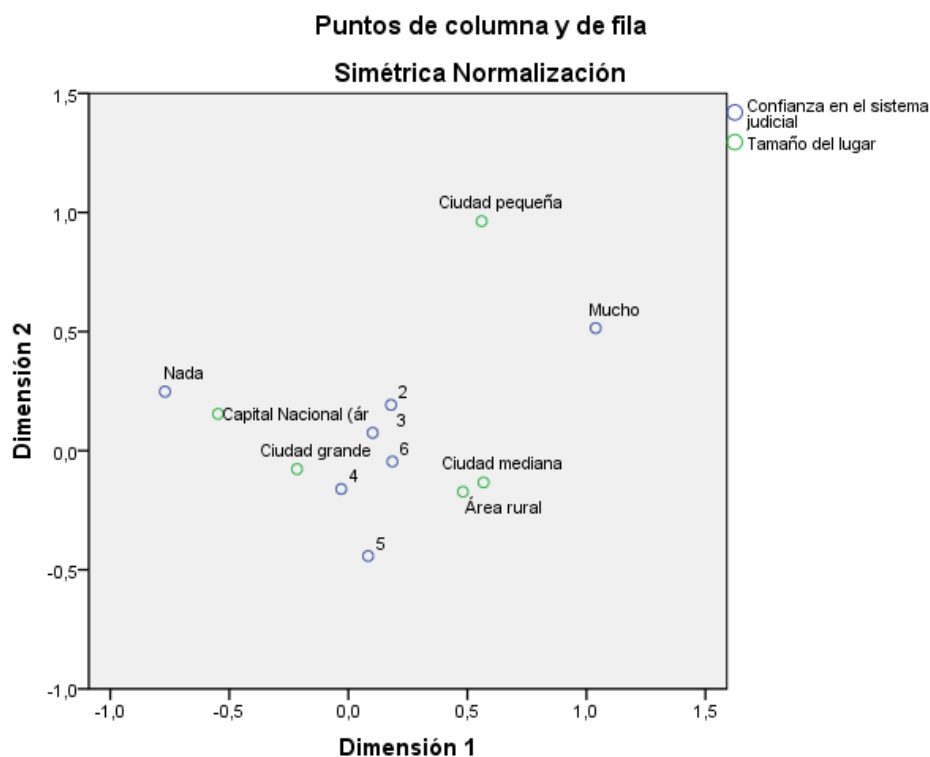
Asociación entre la credibilidad del Sistema Judicial y el tamaño de las ciudades. Colombia 2014.

|                                   |   | Tamaño de las Ciudades |                                 |                          | Total  |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|
|                                   |   | Grande: Mas de 100.000 | Mediana: Entre 25.000 y 100.000 | Pequeña: Menos de 25.000 |        |
| Credibilidad del sistema judicial |   |                        |                                 |                          |        |
| Nada                              |   | 196                    | 26                              | 25                       | 247    |
|                                   | — | 20,2%                  | 9,4%                            | 10,8%                    | 16,7%  |
| 2                                 |   | 123                    | 41                              | 39                       | 203    |
|                                   | — | 12,7%                  | 14,7%                           | 16,8%                    | 13,7%  |
| 3                                 |   | 167                    | 53                              | 42                       | 262    |
|                                   | — | 17,2%                  | 19,1%                           | 18,1%                    | 17,7%  |
| 4                                 |   | 198                    | 57                              | 43                       | 298    |
|                                   | — | 20,4%                  | 20,5%                           | 18,5%                    | 20,1%  |
| 5                                 |   | 163                    | 53                              | 36                       | 252    |
|                                   | — | 16,8%                  | 19,1%                           | 15,5%                    | 17,0%  |
| 6                                 |   | 83                     | 23                              | 23                       | 129    |
|                                   | — | 8,6%                   | 8,3%                            | 9,9%                     | 8,7%   |
| Mucho                             |   | 39                     | 25                              | 24                       | 88     |
|                                   | — | 4,0%                   | 9,0%                            | 10,3%                    | 5,9%   |
| Total                             |   | 969                    | 278                             | 232                      | 1479   |
|                                   |   | 100,0%                 | 100,0%                          | 100,0%                   | 100,0% |

Se aprecia que en las ciudades de más de 100.000 habitantes se tiene el mayor porcentaje de los que no se cree NADA en el sistema judicial, por el contrario, en las ciudades medianas, entre 25.000 y 100.000 habitantes (9,4%) y las pequeñas, menos de 25.000 (10,8%) es donde dichos porcentajes son menores, lo que indica que en estas dos últimas categorías es donde se tiene mayor credibilidad en el sistema. Para confirmar esta situación, se construyó el mapa perceptual siguiente.

### 1.5.1. Correspondencia Simple Credibilidad en el Sistema Judicial y el tamaño de la ciudad.

Es importante determinar si hay diferencia en la percepción sobre la credibilidad del Sistema Judicial considerando no sólo la región, sino, el tamaño de la ciudad, por ende, se agruparon las regiones según ciudades: grandes, medianas, pequeñas, además, de la capital y el área rural, tal como se muestra a continuación.



**Figura 4: Mapa perceptual credibilidad del sistema judicial según tamaño de la ciudad. Colombia 2014.**

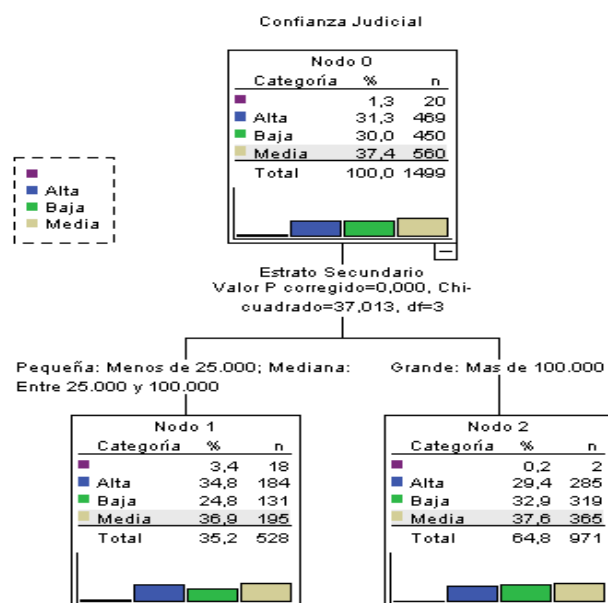
Coherente con lo detectado anteriormente, se aprecia que en las ciudades de menos de 25.000 habitantes es donde se tiene mayor credibilidad en el sistema judicial colombiano,

por el contrario en las más grandes, más de 100.000 habitantes, la credibilidad es menor. En las medianas, las valoraciones son intermedias, es decir, 3, 4 y 5, lo que indica una credibilidad aceptable o buena en el sistema.

### 1.6. Técnica del Árbol para determinar asociación entre la credibilidad del Sistema Judicial Colombiano y algunas variables de identificación.

La técnica del árbol de clasificación se utiliza para determinar que variables pueden estar asociadas con otra variable dependiente, dado que éste es nuestro caso se trabajó usando el método de crecimiento CHAID.

Para realizar el análisis se tomó como variable dependiente la credibilidad del Sistema Judicial recodificada en tres categorías, Baja (1,2) Media (3,4) y alta (más de 5) y se incluyeron las variables independientes cualitativas: Estrato Primario (Región), Estrato Secundario (Tamaño de la ciudad por población), Urbano/Rural, Tamaño del lugar (territorio) y Género. Luego de utilizar la técnica con el SPSS, se obtuvo lo siguiente.



**Figura 5: Gráfico de Árbol entre la categoría de la credibilidad del Sistema Judicial y variables de identificación. Colombia 2014.**

La proporción de personas en las diferentes categorías de la confianza judicial fue similar; sin embargo, en la categoría de media, se encontró un mayor porcentaje, el 37,4%.

Esta nueva variable recodificada muestra asociación con la variable denominada estrato secundario, donde las poblaciones medianas y pequeñas, muestran una menor proporción de personas con baja calificación en la credibilidad en el sistema judicial.

### **1.7. Análisis Factorial variables de percepción sobre la justicia Colombiana, 2014.**

La pertinencia de éste análisis exploratorio, se mide con varias pruebas, ellas son: la de esfericidad de Bartlett's y el Kaiser-Meyer-Olkin.

Antes de llevar a cabo la técnica de factor exploratorio, se presentan los resultados descriptivos.

#### **1.7.1. Estadísticos descriptivos de los enunciados utilizados para la percepción sobre la credibilidad del Sistema Judicial Colombiano.**

Los enunciados se midieron en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la valoración más baja y equivale a NADA y el 7 a MUCHO. La tabla siguiente presenta los promedios y desviaciones de estos reactivos.

**Tabla 11.**

Medidas resumen sobre los enunciados sobre la percepción de la credibilidad en el sistema judicial. Colombia 2014.

| <b>Estadísticos descriptivos</b>                         |       |                   |                |
|--|-------|-------------------|----------------|
|  | Media | Desviación típica | N del análisis |
| Confianza interpersonal                                  | 2,12  | ,879              | 1248           |
| Confianza que el sistema judicial castigue los culpables | 2,71  | 1,090             | 1248           |
| Cortes garantizan un juicio justo                        | 3,34  | 1,555             | 1248           |
| Respeto a las instituciones                              | 4,69  | 1,917             | 1248           |
| Derechos básicos protegidos                              | 3,52  | 1,628             | 1248           |
| Confianza en el sistema judicial                         | 3,55  | 1,742             | 1248           |
| Confianza en el congreso                                 | 3,33  | 1,683             | 1248           |
| Confianza en el Gobierno Nacional                        | 3,64  | 1,767             | 1248           |
| Confianza en los partidos políticos                      | 2,61  | 1,587             | 1248           |
| Confianza en el presidente                               | 3,40  | 1,922             | 1248           |
| Confianza en la Corte Suprema de Justicia                | 3,64  | 1,721             | 1248           |
| Confianza en las elecciones                              | 3,04  | 1,705             | 1248           |
| Confianza en la Corte Constitucional                     | 3,56  | 1,699             | 1248           |

Se destaca que lo mejor valorado es el respeto a las instituciones con un promedio de 4,69, no obstante, se tiene una desviación alta de 1,97, lo que indica que las opiniones en éste sentido no fueron homogéneas. Los enunciados Confianza en el Gobierno Nacional y en la Corte Suprema de Justicia obtuvieron una percepción similar con un promedio de 3,64 y una desviación relativamente alta de 1,7 aproximadamente. Esto indica que las respuestas no fueron similares y por lo tanto, hay opiniones que le dan mediana confiabilidad a estos aspectos y otros no lo consideran así.

De otro lado, se encontraron aspectos considerados por los encuestados con baja confianza, estos enunciados son: Interpersonal (2,12), en los partidos políticos (2,61) y el no castigo a los culpables (2,71). En general, la comunidad no tiene una percepción positiva en la confianza y la credibilidad en los diversos aspectos evaluados.

### **1.7.2. Pertinencia análisis de factor enunciados utilizados para la percepción sobre la credibilidad del Sistema Judicial Colombiano.**

La prueba de esfericidad de Bartlett mide el nivel de correlación existente entre variables, es decir, indica la existe de una relación lineal entre las variables, si el valor es menor de 0,05, el análisis factorial es adecuada y por lo tanto, los enunciados están intercorrelacionadas entre sí.

El índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) representa la proporción de la varianza que puede ser causada por los factores latentes. Bisquerra (1989) califica los valores del índice KMO como bajos si están comprendidos entre 0,50 y 0,60, mediocres entre 0,60 y 0,70, medianos entre 0,70 y 0,80, meritorios entre 0,80 y 0,90 y muy buenos los valores situados entre 0,90 y 1,00.

**Tabla 12.**

Pruebas de pertinencia del análisis de factor de los enunciados sobre la percepción de la credibilidad del Sistema Judicial. Colombia 2014.

| <b>KMO y prueba de Bartlett</b>                      |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. |                         | ,919     |
| Prueba de esfericidad de Bartlett                    | Chi-cuadrado aproximado | 6119,251 |
|  | gl                      | 78       |
|  | Sig.                    | ,000     |

El KMO es igual a 0,919 lo que indica que los enunciados están muy correlacionados y por lo tanto, se puede utilizar la técnica de factor para reducir las variables e identificar nuevas componentes. De igual forma la prueba de esfericidad de Bartlett tiene un Sig. de 0,000, confirmando que efectivamente se puede utilizar la técnica.

**Tabla 13.**

Varianza explicada de los factores de percepción del Sistema Judicial en Colombia. Año 2014.

| Componente | Varianza total explicada |                  |             |  |                  |             |   |                  |             |
|------------|--------------------------|------------------|-------------|--|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
|            | Autovalores iniciales    |                  |             | Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción |                  |             | Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación |                  |             |
|            | Total                    | % de la varianza | % acumulado | Total  | % de la varianza | % acumulado | Total   | % de la varianza | % acumulado |
| 1          | 5,565                    | 42,809           | 42,809      | 5,565  | 42,809           | 42,809      | 5,193   | 39,949           | 39,949      |
| 2          | 1,034                    | 7,953            | 50,763      | 1,034  | 7,953            | 50,763      | 1,406   | 10,813           | 50,763      |
| 3          | ,965                     | 7,424            | 58,187      |  |                  |             |   |                  |             |
| 4          | ,828                     | 6,368            | 64,555      |  |                  |             |   |                  |             |
| 5          | ,713                     | 5,481            | 70,037      |  |                  |             |   |                  |             |
| 6          | ,677                     | 5,205            | 75,242      |  |                  |             |   |                  |             |
| 7          | ,654                     | 5,030            | 80,272      |  |                  |             |   |                  |             |
| 8          | ,550                     | 4,233            | 84,504      |  |                  |             |   |                  |             |
| 9          | ,533                     | 4,101            | 88,605      |  |                  |             |   |                  |             |
| 10         | ,475                     | 3,652            | 92,257      |  |                  |             |   |                  |             |
| 11         | ,425                     | 3,269            | 95,526      |  |                  |             |   |                  |             |
| 12         | ,302                     | 2,326            | 97,852      |  |                  |             |   |                  |             |
| 13         | ,279                     | 2,148            | 100,000     |  |                  |             |   |                  |             |

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

En la tabla, se observa que los dos factores seleccionados explican un poco más de la mitad de la variación total (50,76%).

El primer factor explica el 39,94% de la varianza total, mientras que el segundo aporta con un 10,81% en esa explicación. Es lógico decir que mientras más factores se incluyan, estos explican cada vez menos, por eso, no es prudente tener muchos factores, aunque tengan un auto valor mayor de uno.

Cuando se utiliza el método de análisis de factor, se busca reducir varias variables en menos dimensiones o factores; sin embargo, puede suceder que algunas variables expliquen distintos factores de manera importante. Para determinar cuánto aporta cada variable uno de los dos factores. Para esto se utiliza el método de varimax, en el cual se rotan los ejes garantizando que todas y cada una de las variables van a aportar a solo uno de los factores. De esta manera se facilita la interpretación y el análisis de los resultados. Esta operación da origen a la siguiente tabla.

**Tabla 14.**

Matriz de correlaciones rotadas de los factores de percepción de credibilidad del Sistema Judicial en Colombia. Año 2014.

| Matriz de componentes rotados <sup>a</sup>               |            |       |
|--|------------|-------|
|  | Componente |       |
|  | 1          | 2     |
| Confianza en el Gobierno Nacional                        | ,781       | ,140  |
| Confianza en el sistema judicial                         | ,749       | ,035  |
| Confianza en el congreso                                 | ,732       | ,144  |
| Confianza en la Corte Suprema de Justicia                | ,712       | ,269  |
| Derechos básicos protegidos                              | ,703       | -,043 |
| Confianza en la Corte Constitucional                     | ,681       | ,313  |
| Confianza en el presidente                               | ,664       | ,300  |
| Cortes garantizan un juicio justo                        | ,621       | -,075 |
| Confianza en las elecciones                              | ,595       | ,474  |
| Confianza en los partidos políticos                      | ,572       | ,372  |
| Respeto a las instituciones                              | ,572       | ,047  |
| Confianza que el sistema judicial castigue los culpables | -,423      | -,059 |
| Confianza interpersonal                                  | ,083       | -,853 |

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

Los enunciados se encuentran ordenados en cuanto a su aporte a cada factor, mientras más alto es el coeficiente más aporta al respectivo factor.

Al primer factor aportan principalmente los ítems de credibilidad en:

- Gobierno Nacional.
- Sistema Judicial.



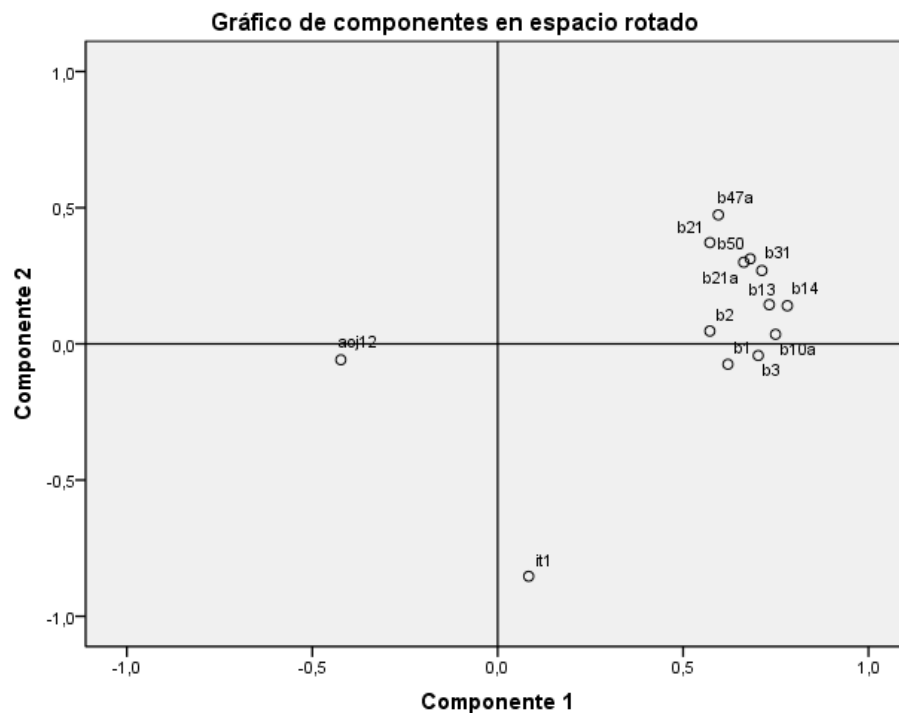
- Congreso.
- Corte Suprema de Justicia.
- Derechos básicos protegidos.

Por lo tanto, el factor podría tomar el nombre de “Institucionalidad del estado”.

Al segundo factor aportan solamente el ítem de confianza interpersonal con un coeficiente de -0,853, por lo tanto, el factor se identifica con esa característica.

Por lo tanto, el factor podría tomar el nombre de “Confianza Interpersonal”.

Gráfico de saturaciones, refleja la ubicación de los ítems en un plano cartesiano definido por los factores.



**Figura 6: Mapa perceptual credibilidad del Sistema Judicial. Colombia 2014.**

Se destaca que hay dos ítems distantes del resto de componentes analizadas, ellas son: it1, que corresponde al enunciado credibilidad en que el Sistema Judicial castigue los culpables y la variable aej12 la cual es Confianza interpersonal. Los demás enunciados se encuentran aglomerados en el mapa, por lo tanto, son percibidos de manera similar.

## CAPITULO III

### RESULTADOS

#### 1. Análisis e interpretación.

Algunos índices económicos y sociales de los países que hacen parte de la tabla No. 1, nos permiten complementar las conclusiones derivadas de la observación de los datos.

Una descripción superficial nos dice que los países donde la comunidad tiene una mejor percepción de credibilidad del Sistema Judicial son en su orden: Canadá (58,10%) y Reino Unido (52,00-), por el contrario, los de menos credibilidad fueron: Bolivia (21,80%), Paraguay (28,50%) y México (31,70%).

Complementando esta observación con algunas condiciones sociales y económicas peculiares, pero también otras similares a los Estados que hacen parte de su entorno geográfico, podemos ampliar el ámbito de interpretación de los resultados obtenidos.

Bolivia tiene una población de 11,2 millones de personas, su PIB es de US\$ 34.4 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 3.061. Los requerimientos básicos<sup>3</sup> se encuentran satisfechos en un 40,0% y los potenciadores de eficiencia<sup>4</sup> se ubican en el 50,0%.

El Sistema Judicial está formado por el Tribunal Supremo de Justicia y las instancias inferiores, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo Superior de la Magistratura y El Tribunal Agroambiental. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace por elección directa. La figura de instancia judicial máxima, hoy Tribunal Supremo, fue establecida por el Libertador Simón Bolívar y empezó a funcionar desde 1827.

Estados Unidos tiene una población de 319 millones de personas, su PIB es de US\$ 17.418,9 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 54.597. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 20,0% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 50,0%.

El Sistema Judicial está formado por la Suprema Corte de Justicia, las cortes de Apelación, las Cortes de Distrito, la Conferencia Judicial de los EE. UU. Y la Oficina Administrativa de los Tribunales Federales. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace

---

<sup>3</sup> Fortaleza Institucional, Infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria.

<sup>4</sup> Educación superior y formación, Eficiencia de mercado de bienes, Eficiencia del mercado laboral, Desarrollo del mercado financiero, Preparación tecnológica y Tamaño de los mercados.

por elección directa. La figura de instancia judicial máxima, la Suprema Corte, fue establecida en 1789 y empezó a funcionar desde 1790.

Canadá tiene una población de 35,5 millones de personas, su PIB es de US\$ 1.788,7 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 50.398. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 20,0% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 50,0%.

El Sistema Judicial está formado por la Corte Suprema de Canadá, la Corte de Apelaciones, las cortes provinciales y las instancias inferiores. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace por designación del ejecutivo. La figura de instancia judicial máxima, Corte Suprema, fue establecida en 1875 y empezó a funcionar desde 1876.

El Reino Unido tiene una población de 64,5 millones de personas, su PIB es de US\$ 2.945,1 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 45.653. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 20,0% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 50,0%.

El Sistema Judicial está formado por el Tribunal Supremo del Reino Unido y las Cortes inferiores. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace por designación del ejecutivo. La figura de instancia judicial máxima, hoy Tribunal Supremo, fue establecida en 2009; sin embargo, la independencia judicial respecto del Rey se proclamó desde 1670.

Argentina tiene una población de 42 millones de personas, su PIB es de US\$ 540,2 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 12.873. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 33,3% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 50,0%.

El Sistema Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales inferiores y el Consejo de la Magistratura. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace por concurso de méritos y carrera judicial. La figura de instancia judicial máxima, Corte Suprema de Justicia, fue establecida en 1853 y empezó a funcionar desde 1863.

Ecuador tiene una población de 16 millones de personas, su PIB es de US\$ 100,8 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 6.286. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 40,0% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 50,0%.

El Sistema Judicial está formado por Corte Nacional de Justicia y las instancias inferiores, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. El ingreso de los jueces a la judicatura

se hace por concurso de méritos y carrera judicial. La figura de instancia judicial máxima, Corte Nacional de Justicia, fue establecida en 1821 y empezó a funcionar desde 1822.

Honduras tiene una población de 8,3 millones de personas, su PIB es de US\$ 19,5 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 2.361. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 52,8% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 40,4%.

El Sistema Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia y las instancias inferiores. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace por concurso de méritos y carrera judicial. La figura de instancia judicial máxima, Corte Suprema de Justicia, fue establecida y empezó a funcionar desde 1825.

México tiene una población de 119,7 millones de personas, su PIB es de US\$ 1.282,7 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 2.361. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 35,7% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 50%.

El Sistema Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las instancias inferiores, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace por concurso de méritos y carrera judicial. La figura de instancia judicial máxima, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue establecida y empezó a funcionar desde 1824.

Nicaragua tiene una población de 6,2 millones de personas, su PIB es de US\$ 11,7 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 1881. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 60% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 35%.

El Sistema Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Apelaciones y las instancias inferiores. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace por concurso de méritos y carrera judicial. La figura de instancia judicial máxima, Corte Suprema de Justicia, fue establecida y empezó a funcionar desde 1826.

Paraguay tiene una población de 6,9 millones de personas, su PIB es de US\$ 29,7 billones, el PIB per cápita asciende a US\$ 4.305. Los requerimientos básicos se encuentran satisfechos en un 40% y los potenciadores de eficiencia se ubican en el 50%.

El Sistema Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Apelación y las instancias inferiores. El ingreso de los jueces a la judicatura se hace por concurso de méritos y carrera judicial. La figura de instancia judicial máxima, Corte Suprema de Justicia, fue establecida y empezó a funcionar desde 1842.

Los factores que explican la diferencia entre los niveles de percepción se encuentran ligados más a la identidad con la institución encargada de administrar justicia y por ende a unos niveles de respeto a las instituciones, además de unos índices de criminalidad<sup>5</sup> bastante bajos en los países donde los niveles son los más altos. La inequidad social es uno de los factores que erosiona la confianza de estas latitudes y que toca no solo la confianza social, sino la credibilidad en las Instituciones.

Otro punto a observar es la variación en la valoración que se le da a la corte suprema de justicia, la corte constitucional y el sistema judicial, siendo corporaciones que pertenecen a este último. El fundamento de la mejor valoración entre las 3 de la corte suprema de justicia es explicado por la antigüedad que tiene en nuestra tradición jurídica.

Los cambios que se presentan en la percepción sobre la credibilidad del Sistema Judicial, son explicados en un 47,2% por los cambios en el indicador de la independencia judicial. La estimación encontrada es que la credibilidad en el sistema judicial se incrementa en aproximadamente cinco puntos (4,85), cuando el índice de independencia se incrementa en una unidad, por lo tanto, se evidencia una relación directa entre ambas variables.

Observamos aquí una prueba concreta de las ideas referidas a la diferencia entre confianza personal, social y credibilidad en las instituciones. La credibilidad en las instituciones está marcada principalmente por un conjunto seguro de normas, cuya aplicación debe estar garantizada por un sistema que involucra tanto recursos físicos, como talento humano. El procedimiento como este talento humano entra a hacer parte del sistema, no es otra cosa que un conjunto de normas que otro órgano del sistema debe garantizar su concreción, por eso no es ajena la forma de ingreso a la credibilidad del Sistema Judicial, sino que tiene una relación directa más con la independencia judicial que con la credibilidad del Sistema Judicial. La independencia judicial está determinada por la fortaleza de la normatividad y por

---

<sup>5</sup> United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC.

la capacidad del talento humano de evitar que inferencias indebidas le desvíen de la aplicación óptima de las normas.

Por otro lado, el 13,2% de los cambios en el Sistema de Justicia son explicados por las variables educación, región natural, ingresos, respeto a las instituciones. Se destaca que el Respeto a las instituciones y los años de educación son estadísticamente significativos y aportan a explicar la variable Sistema Judicial. Con respecto a las regiones, se encontró que Bogotá y la región Central son significativas. Dado que la categoría base para hacer el cálculo fue la región Atlántica se puede afirmar que la región Atlántica y la región central explican significativamente la variable credibilidad en el Sistema Judicial. Si bien en las otras regiones no se consideran significativas no es posible desconocerlas, dado que hacen parte de la variable Región.

Este hallazgo se sostiene en las múltiples diferencias sociológicas de quienes cohabitan el territorio colombiano. La visión de la vida, las tradiciones, el clima, las formas de intercambio, los mecanismos de adaptación al medio, los recursos naturales y algo muy importante, la importancia de la familia y su forma de concebirla. Esto está además complementado con la representación y el peso político que tienen algunas regiones en el gobierno nacional, lo que significa mayor presencia institucional en lo referente a los programas nacionales y por ende mayor desarrollo del capital social, mayor educación y mayores ingresos. Empieza entonces a advertirse una situación de inequidad por parte de los que alcanzan un mayor grado de educación y cierta ausencia de credibilidad en un sistema de instituciones que se percibe como facilitador, y a veces promotor, de las diferencias económicas, sociales y regionales en el acceso a los recursos para el desarrollo.

Lo anterior se colige de observar como en la variable ingreso, sólo una fue significativa y corresponde a la variable ingreso entre 810.001 – 960.000. Estas personas, que las ubicamos en la clase media-baja, tienen una mejor valoración de la credibilidad en el sistema judicial. Aquellos que se encuentran en otros rangos de ingresos, casualmente tienen una menor valoración del Sistema de Justicia y los que tienen mayores ingresos no son significativos.

Esta situación indica que el ingreso da la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida y quienes están sumidos en una situación de miseria y parte de pobreza consideran que todo el sistema institucional está diseñado para evitar el acceso a los recursos para ascender

socialmente. Los que están ubicados en la clase media, muestran una actitud de esperanza hacia la vida y ven la credibilidad en las instituciones como un sentimiento recíproco y una forma de evitar crear obstáculos en su tránsito a mejores condiciones económicas y de vida. Terminamos con los de mayores ingresos que, quizás por su número no son significativos, y quizás por el grado de educación que han alcanzado son conscientes de que el sistema es influenciable y su posición les permite tener algún tipo de injerencia.

Teniendo en cuenta la diversidad cultural de las regiones del país y además la información que se obtuvo del procesamiento de los datos nos permitimos hacer las siguientes apreciaciones. Se destaca que en Bogotá es donde menos confianza se tiene en el sistema judicial, esto se deduce, al encontrar que el 24,4% de los respondientes de esa zona, dicen no tener NADA de credibilidad en el sistema, además, tiene el mejor porcentaje de personas que creen mucho en el sistema (3,1%). Por el contrario, las regiones Antiguos Territorios Nacionales y la Atlántica, es donde más confianza tienen los ciudadanos, prueba de ello, es los porcentajes más bajos en la no creencia en el sistema y los más altos en la creencia del mismo.

Empieza entonces a hacerse nítida la posible asociación no sólo de las dos variables consideradas como lo hace la Chi Cuadrado, sino, que identifica la posible asociación entre las categorías de cada variable cualitativa.

En el mapa de la figura 3, se identifica claramente, que en Bogotá es donde se obtuvo menor credibilidad en el sistema, esto se deduce al observar que la categoría de NADA está muy cerca de Bogotá, con ese mismo raciocinio, la categoría MUCHO está más próximo a Antiguos Territorios Nacionales, se identifica además, que para los usuarios, las regiones Central y oriental son percibidas de manera similar y con valoraciones de regular credibilidad en el sistema, están cerca de los valores 2 y 3. Las regiones Atlántica y Pacífica sin ser muy próximas entre ellas, si se sitúan a distancias similares de los valores 4 y 5 que se pueden considerar de buena credibilidad.

El tamaño de las regiones es otra de las variables que se encuentran asociada a la credibilidad del sistema judicial. Se aprecia que en las ciudades de más de 100.000 habitantes se tiene el mayor porcentaje de los que no se cree NADA en el sistema judicial, por el contrario, en las ciudades medianas, entre 25.000 y 100.000 habitantes (9,4%) y las pequeñas,

menos de 25.000 (10,8%) es donde dichos porcentajes son menores, lo que indica que en estas dos últimas categorías es donde se tiene mayor credibilidad en el sistema.

No sólo la región, sino, el tamaño de las ciudades muestran incidencia en la credibilidad en el sistema judicial. Si agrupamos las regiones según ciudades grandes, medianas, pequeñas, además, de la capital y el área rural, lo cual se evidencia en la gráfica de la figura 4, nos permite observar como en las regiones de menos de 25.000 habitantes se tiene mayor credibilidad en el sistema judicial colombiano, al igual que en el área rural. Por el contrario en las más grandes, más de 100.000 habitantes, la credibilidad es menor. En las medianas, las valoraciones son intermedias, es decir, 3,4 y 5, lo que indica una credibilidad aceptable o buena en el sistema.

La técnica del árbol de la figura 5 nos permite apreciar que la proporción de personas en las diferentes categorías de la confianza judicial fue similar, sin embargo, en la categoría de media, se encontró un mayor porcentaje, 37,4%. Esta nueva variable recodificada muestra asociación con la variable tamaño de las ciudades, donde las poblaciones medianas y pequeñas, muestran una menor proporción de personas con baja calificación en la credibilidad judicial.

De otro lado, se encontraron aspectos considerados por los encuestados con baja confianza, estos enunciados son: Confianza Interpersonal (2,12), en los partidos políticos (2,61) y el no castigo a los culpables (2,71). En general, la comunidad no tiene una percepción positiva en la credibilidad los diversos aspectos evaluados.

Si medimos el nivel de correlación entre variables, mediante la prueba de esfericidad de Barlett y posteriormente utilizamos la técnica del análisis factorial hallamos que al primer factor aportan principalmente los ítems de credibilidad en el gobierno nacional, el sistema judicial, el congreso, la corte suprema de justicia y derechos básicos protegidos. Por esta razón, el factor será denominado “Institucionalidad del estado”.

Al segundo factor aportan solamente el ítem de confianza interpersonal por lo tanto, el factor será denominado “confianza interpersonal”.

En el gráfico de saturaciones de la figura 6, se refleja la ubicación de los ítems en un plano cartesiano definido por factores. En el se destaca que hay dos ítems distantes del resto de



componentes analizadas, ellas son: it1, que corresponde al enunciado Confianza que el sistema judicial castigue los culpables y la variable aoj12, descrita como Confianza interpersonal. Los demás enunciados se encuentran aglomerados en el mapa, por lo tanto, son percibidos de manera similar.

Esto corrobora la idea de que la confianza interpersonal es percibida de manera distinta a la credibilidad de las instituciones, además de que todas las instituciones no son percibidas de la misma forma por parte de la ciudadanía. Vemos como la justicia penal maneja índices, negativos, alejados del resto de las instituciones, por los altos índices de criminalidad que hoy se perciben y la percepción de impunidad por parte de la ciudadanía.

## CONCLUSIONES

### 1. Conclusiones.

Después de haber realizado este recorrido por la credibilidad del sistema judicial vista desde las multiculturalidad y multipoliticidad<sup>6</sup> de nuestro país, detallamos entonces lo que vemos hoy con mayor claridad después de que el velo se ha hecho menos denso.

Hoy debemos hablar de credibilidad en el sistema de justicia y reservar el término confianza para referirnos a la confianza social, interpersonal e intergrupos; puesto que tanto la percepción diferencial de la ciudadanía, como las fuentes particulares desde las que emana exigen esta distinción. Por estas razones nos sumamos a las posturas que viene siendo argumentada por el profesor Montero (2008) y que se apoya en los planteamientos de diversos académicos como Luhmann (1979: 39, y 1988); Giddens (1990: 114); Seligman (1997: 16-22); Offe (1999: 44-45), y Hardin (2000: 33-35).

El surgimiento o fortalecimiento de la credibilidad desde luego que será más fácil en presencia de altos niveles de confianza social; sin embargo, no se pueden confundir. En los argumentos de Herreros (2003) encontramos que las fuentes de la confianza social son la participación en asociaciones o mediante el empleo de signos distintivos de la confianza. El cumplimiento, por ejemplo, de los términos, atención adecuada al público, publicidad de la información que no tiene reserva, etc. Serían un signo distintivo de la fuerza y eficacia que tiene la normatividad que rige el Sistema Judicial. No obstante lo anterior y para que el ciudadano pueda experimentar la puesta en práctica de la normativa, se debe contar con estrategias e instrumentos de comunicación efectivos entre el ciudadano y el sistema judicial, relación que debe ser de doble vía.

La credibilidad en las instituciones es identificada como aquella que pertenece a la esfera pública y se construye con base a fuentes secundarias, especialmente los medios de comunicación de masas (Baeza: 2011) y conlleva la creencia de que esta no actuará de una forma arbitraria o discriminatoria que resulte dañina para nuestros intereses o los intereses del país; sino que nos tratará, a nosotros y a los demás ciudadanos de una forma igualitaria,

---

<sup>6</sup> Este término es propio del autor y hace referencia a la mayor o menor incidencia del poder político de las regiones o departamentos en las políticas nacionales e inversión pública.

justa y correcta. Por esta razón es considerada como un indicador del sentimiento de los ciudadanos hacia el sistema político (Baeza, 2011).

Al reconocer que los ciudadanos conciben de forma distinta las instituciones a la hora de depositar su credibilidad (Baeza, 2011: 81), aceptamos la identificación de los distintos tipos de instituciones realizado por Rothstein y Stolle (2002) y con base al mismo proponemos la existencia de otros subtipos de credibilidad, dentro de la referida a las instituciones. La credibilidad política, credibilidad de orden y credibilidad de control. La credibilidad política, dirigida hacia las instituciones políticas o representativas, como por ejemplo: el poder ejecutivo, el poder legislativo y los partidos políticos; la credibilidad de orden, que tiene como objeto las imparciales y de orden, tales como: la Administración de Justicia, el ejército, la policía y la credibilidad de control la referente a las instituciones de control como: La prensa, la iglesia, la contraloría, la procuraduría, entre otras.

Esta clasificación se apoya en los resultados del procesamiento de los datos que refuerza la literatura referida a una percepción diferencial de la ciudadanía respecto a los tipos de confianza y de credibilidad, que incluso en la misma institución puede variar.

En término institución recoge un conjunto de normas, pero deja por fuera una serie de elementos que en el caso de la Administración de Justicia son fundamentales para la optimización de la función. Es por eso que consideramos que el ente concreto, conjunto de elementos, actores, procedimientos, procesos y normas, es denominado Sistema Judicial y la Administración de Justicia es la función de este sistema, deduciendo que cuando un despacho judicial produce una providencia, entrega un producto, después de haber sido procesada la demanda de justicia elevada por los ciudadanos. Esto no es más que la materialización del fin del estado consistente en el aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de orden justo.

Cuando el ciudadano concibe la idea de que en el sistema judicial no existe un sistema de normas seguro, procede igual que cuando el sistema político muestra debilidad institucional; en este caso compensa la disminución de confianza institucional con un pacto de confianza interpersonal con un líder carismático, en aquel compensa la erosión de la confianza institucional acudiendo a la confianza interpersonal con el Juez, en el caso de que sea posible, o con otro de los actores del sistema, que puede ser con cualquier funcionario del juzgado.

En las grandes ciudades las posibilidades de interactuar con los administradores de justicia, no por la falta de disposición de estos servidores, sino por la cantidad de procesos a su cargo, son mínimas. No ocurre lo mismo en las pequeñas localidades y zonas rurales, donde el administrador de justicia o el funcionario debe convivir con los habitantes de la municipalidad donde administra justicia.

En este proceso de personalización de la credibilidad institucional observamos los primeros asomos de la corrupción, por el riesgo que envuelve, e incluso, se advierte la existencia de unos actores fundamentales, cuya función en el sistema y el impacto de su desempeño en la credibilidad del sistema de justicia ha sido subvalorada: el abogado.

Este profesional es quien tiene la relación directa con el ciudadano, más del 95% de las veces que se acude al Sistema Judicial, y él es quien interactúa con el sistema. Es por ello que la profesión de abogado litigante carga sobre sus hombros parte de la desconfianza hacia el sistema judicial y de su desprestigio, lo que nos acerca cada vez más a la certeza del aporte positivo o negativo que el litigante hace a la credibilidad del Sistema Judicial; sin embargo, por la complejidad y especialidad del tema, merece por lo aquí concluido un estudio especial.

Hoy reconocemos algunos esfuerzos que se han hecho para medir la confianza social y aterrizarla del plano ideal al material; sin embargo, consideramos que estas variables no pueden ser aplicadas para medir la credibilidad en el sistema judicial. Hoy existe un intento por construir un índice de confianza jurídica, creemos que debería llamarse credibilidad jurídica, que hoy día es adelantado por algunos círculos judiciales y académicos, cuyas ideas se encuentran expuestas pero no se han unificados los criterios ni operacionalizado las variables que permitirán conocerlo. Este paso sería el mayor avance en la medición de la credibilidad en el sistema judicial y, consecuentemente, en la obtención de mejores niveles, puesto que gran parte de esa credibilidad recae sobre la fortaleza de las normas que rigen en determinado contexto.

Existen una serie de variables que inciden en la credibilidad en el Sistema Judicial como lo son la Independencia Judicial, por un lado, y la educación, región natural, ingresos, tamaño de las ciudades, por otro. La diferenciamos en estos dos grupos puesto que solo la variable independencia judicial tiene una relación directa con la credibilidad en el Sistema de Justicia, de tal forma que los cambios que se presentan en la percepción sobre la credibilidad del Sistema Judicial, son explicadas en un 47,2% por los cambios en el indicador de la

independencia judicial. Se estima que la credibilidad en el sistema judicial se incrementa en aproximadamente cinco puntos (4,85), cuando el índice de independencia se incrementa en una unidad. Las sumadas las otras variables arriba relacionadas explican la credibilidad en el sistema en un 13,2%.

La independencia judicial no es otra cosa que la ausencia de influencia sobre el juez, por fuera de la ley, de cualquier otro actor, tanto en el desempeño cotidiano de sus funciones como al momento de tomar una decisión, respecto a un caso en concreto. Igualmente, se excluye cualquier inclinación que no se derive de las fuentes del derecho (Burgos, 2003). Se aclara que Independencia Judicial no significa ausencia total de relaciones del juez con el entorno, ni de la rama judicial con otros poderes públicos; cuando por el contrario la complejidad de las relaciones sociales e institucionales exige una coordinación de funciones, por ser esta de diversa naturaleza al estar al servicio del ser humano, complejo y diverso.

La forma de ingreso de los jueces a la judicatura, ya sea por elección directa, indirectamente por representantes o concurso de méritos, no incide directamente en la credibilidad en el Sistema Judicial, pero lo hace indirectamente al exigir la aplicación de la reglamentación en el ingreso de los servidores judiciales que administran justicia, que sin duda determina el grado de independencia con que estos funcionarios puedan actuar.

Analizando las otras variables, la educación y los ingresos, observamos como la inequidad regional en materia educativa es correlativa con el nivel de ingresos y, en consecuencia, nos muestran una confianza diferencial del Sistema de Justicia, por regiones. La educación como elemento de capital social facilita la generación de otro tipo de capital social, como lo es la credibilidad en las instituciones; pero a la vez despierta un conocimiento aproximado del funcionamiento real de las organizaciones estatales y de la vida social. Es por ello que poblaciones con los más altos índices de educación pueden presentar menores índices de credibilidad en el Sistema de Justicia.

La credibilidad en el Sistema Judicial existente en las regiones naturales, evidencia distintos grados dependiendo de la ubicación. Así encontramos que en el Distrito Capital es donde existe la proporción de personas cuya credibilidad es NADA en el Sistema Judicial. En el otro extremo encontramos los antiguos territorios nacionales y la Costa Atlántica, pues es donde la proporción que no cree NADA en el Sistema Judicial es menor. La Región

pacífica muestra mejores índices de credibilidad, mientras que la Región Central y Oriental tienen una confianza Regular del Sistema de Justicia.

Lo mismo sucede con el tamaño de las ciudades. El número de habitantes por ciudades, parece tener una relación con el sistema de Justicia. En las ciudades con población superior a 100.000 habitantes se tiene mayor proporción de los que no creen NADA en el Sistema Judicial. En las ciudades con población inferior se aprecia una proporción menor de gente que no confía NADA en el Sistema Judicial.

Esto nos lleva a auscultar sobre los territorios y algunos aspectos sociológicos, para establecer algunas causas que determinen la credibilidad diferencial en el Sistema. Lo primero es que el territorio es ya reconocido como una de las formas básicas de capital social, y que en el caso de las regiones naturales, se caracteriza por *un elemento de carácter ecológico que sobredetermina o condiciona la naturaleza o el funcionamiento regional* (Boiser, 2001 en Moncayo 2002). El territorio dejó de ser un simple espacio físico para convertirse en un facilitador del surgimiento y mayor desarrollo de otras formas de capital social como las Instituciones, la confianza social y el grado de asociatividad (Moncayo, 2002).

En Colombia, abordamos la multiculturalidad de la población desde la unidad básica de la sociedad: la Familia, puesto que es allí donde se construyen el conjunto de patrones emocionales y competencias cognitivas de que dispone el ser humano para comprender y abordar situaciones vitales. Una vez establecido es casi imposible modificarlo (Lazo, 2007).

La existencia de unas regiones naturales, con diferencias sociológicas, envuelve una organización de la economía también plural, conocimientos y experiencias propias en la adaptación a los ecosistemas, hábitos de consumo, política, vida familiar y religiosa. Si tenemos en cuenta que la confianza decrece en relación inversa a la heterogeneidad de un grupo social (Lazo, 2007), es fácil deducir que la sociedad colombiana se encuentra unida por hilos muy débiles de confianza intergrupos más que credibilidad en las instituciones, entre las 60 etnias que cohabitan en el territorio, a esto se le suma el sentimiento regional sociológico y el trato regional político que van parcelando cada vez más la nación.

Pero lo más grave aún, encontramos que la familia actúa, para sus integrantes, como un reductor de riesgos propios del devenir social. El miembro vive apegado a la unión y

confianza en la familia, desconfiando del resto de la sociedad. La carencia de oportunidades lleva a los colombianos a buscar seguridad dentro de la familia, con una jerarquización y donde predomina la familia extensa y alrededor de la mujer. *En el ámbito familiar es donde más se expresa la pluriformidad cultural del país.* (Cuellar, 2000: 359).

Apoyamos los planteamientos del profesor Jorge Baeza (2011) cuando afirma que en países como Chile, encontramos que los jóvenes asignan un alto valor a la familia y a las amistades, lo cual puede estar reflejando una privatización de la vida social, de manera que se constituyen como fuente de apoyo y de sentido en una sociedad cada vez más inestable.

Se debe tener cuidado con el fomento de asociatividad para crear confianza social e igualmente credibilidad, puesto que la segmentación de la sociedad en grupos, como ya se dijo, desemboca en heterogeneidad y esta está en relación inversa con la confianza (Lazo, 2007). Coincidimos entonces con las conclusiones del profesor Baeza (2011) sobre la correspondencia entre los niveles bajos de confianza cuando la distribución de la riqueza es regresiva y se desconoce el valor del asociacionismo.

## **2. Propuestas.**

Para mejorar la percepción que tienen los colombianos en el Sistema Judicial consideramos que se deben adelantar las siguientes acciones, clasificadas teniendo en cuenta la variable que se pretende afectar positivamente:

### **2.1. Independencia Judicial.**

- a. Elaboración de un Plan Nacional de Administración de Justicia, proyectado a veinte años, revisado cada 4 años, que incluya reglamentación de los procesos de selección de todos los funcionarios del Sistema Judicial y obligatoriedad de ingreso mediante lista de elegibles, incluso para las vacancias temporales; normas de funcionamiento y obligatoriedad del cumplimiento de términos judiciales.

El periodo de veinte años corresponde a una generación que nace y se hace mayor de edad, en cinco periodos presidenciales, periodo de inicio y afianzamiento del plan. Con esto se busca crear identidad entre el ciudadano y el sistema, además de que la evolución cultural generaría en la gente sentido de pertenencia y su percepción como un verdadero garante de la convivencia pacífica y de un orden justo.

Actualmente, se adelanta por parte del Ministerio de Justicia y del derecho, la elaboración del Plan Decenal de Justicia 2017-2027, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018; sin embargo, consideramos que una década no es suficiente para la maduración y consolidación de Instituciones Judiciales.

- b. Establecer mecanismos para hacer más públicos los procesos de selección de jueces. Es necesario que el proceso también se perciba como transparente. Por ejemplo: establecer sesiones públicas de presentación de quienes se postulan a los cargos de la rama judicial en la última etapa del concurso.

## **2.2. Educación e ingresos.**

La política social debe dirigirse al cerramiento de las brechas económicas y sociales regionales, a través de la elaboración y ejecución equitativa del presupuesto público, principalmente en Educación, y poniendo en práctica estrategias de integración social cívica, a fin de eliminar aquellos factores sintéticos que incrementan la heterogeneidad y, consecuentemente, parcelación en grupos de la sociedad colombiana.

Creemos que el Sistema Educativo sería el elemento de principal importancia en este proceso de reducción de la heterogeneidad y cohesión social, por su gran capacidad de convocatoria y por el vínculo directo que tiene con la familia.

## **2.3. Diferencias Sociológicas Regionales.**

Adelantar los procesos de ingreso al Sistema Judicial con un enfoque regional, reconociendo las particularidades sociológicas de cada región. Antes que segmentar el sistema, esto significa que sea conformado por diversos actores con idiosincrasia propia de la región donde se administra justicia.

Hoy se pretende elaborar un Plan Decenal de Justicia, con un enfoque regional en su construcción, pero no se habla de un enfoque regional para la participación de los actores en la ejecución y evaluación.

## **2.4. Elementos Transversales.**

Existen algunos elementos transversales que no pueden encuadrarse en las variables anteriores pero los identificamos como agentes que fortalecen incrementan la credibilidad.



- a. **Normatividad estable y eficaz.** El Ciudadano debe percibir la estabilidad de sus derechos y obligaciones; además de evidenciar el acatamiento riguroso de las normas que rigen el Sistema Judicial, por parte de sus funcionarios.
- b. **Medios de Comunicación.** Un sistema de comunicación fuerte y masiva. Debe involucrar todos los medios de comunicación, virtud de su responsabilidad social para con el estado. Necesariamente deben resultar estrategias de comunicación efectivas y adecuadas para llegar a todos los colombianos. En lo posible debe establecerse un área encargada de establecer contacto con la ciudadanía, directamente con los usuarios.

Reforzar la imagen institucional en algunos signos distintivos de la credibilidad institucional. Buen trato con los usuarios, respeto a los términos, atención oportuna de las quejas de los usuarios, buena presentación de los servidores judiciales, en lo posible una dependencia de atención profesional al público.

- c. **Abogado Litigante.** Reconocer la importancia del papel del Abogado litigante en el sistema judicial y concientizarlo de su función. Establecer una serie de incentivos o reconocimientos por ser el vehículo que conduce las expectativas de los ciudadanos al Sistema Judicial y le da cuenta de su funcionamiento.
- d. **La Confianza Social.** Este es quizás el elemento transversal de mayor importancia entre los mencionados y para incrementar su nivel se necesita la fusión entre un gran esfuerzo gubernamental con una decidida disposición social. El aumento de los niveles de confianza social significaría el convencimiento del ciudadano de que no solo puede confiar en los miembros de la familia; sino que también son dignos de esa confianza los miembros de la sociedad. Este incremento es el ambiente favorable para que el Sistema Judicial sea percibido como un instrumento real, eficaz y garante de que su expectativa no será defraudada.

Concluimos convencidos de que realizar estas recomendaciones nos permitirá mejorar la credibilidad en el Sistema Judicial, el ciudadano percibirá la ausencia de malicia y el funcionamiento óptimo del sistema, y además tendrá la oportunidad de constatarlo a través de la comunicación de doble vía y de su veeduría. Obviamente, no se puede dejar de lado una política equitativa, incluyente y de integración geográfica y social que facilite y promueva la

cohesión de todos los asociados. Atacar las causas que erosionan la confianza social y obstaculizan el incremento de la credibilidad institucional, generadas en el seno de la familia resultará una solución que facilitará el surgimiento de esta última, pero no será a corto plazo. Esperamos que con nuestro aporte la generación actual y las venideras tengamos la oportunidad de ver la mejoría del Sistema Judicial y que en algún momento esta situación de desprestigio de la Administración de Justicia sea una historia que recordemos solo para no volver a tropezar.

## Referencias

- ARNOLD, M. y OSORIO, F. (1998). Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría General de los Sistemas. *Revista Universidad de Chile*, 3 (17), 29-46. Recuperado de <http://www.revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/26455/27748>
- AUSTIN, Tomás. 2000. *FUNDAMENTOS SOCIOCULTURALES DE LA EDUCACIÓN*, Editorial Universidad "Arturo Prat" Sede Victoria. Santiago de Chile.
- BAEZA, Jorge. (2011). Juventud y confianza social en Chile. *Última década*, 19(34), 73-92. Recuperado en 19 de febrero de 2016, de [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-22362011000100005&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362011000100005&lng=es&tlng=es). 10.4067/S0718-22362011000100005.
- BOISIER, S. (1988). Las Regiones como Espacios Socialmente Construidos. *Revista de la CEPAL*. Recuperado de [http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11702/035039054\\_es.pdf?sequence=1](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11702/035039054_es.pdf?sequence=1)
- \_\_\_\_\_ (2001). Biorregionalismo: La última Versión del Cuento del Traje del Emperador. *Revista UNIVERSUM*. Recuperado de <http://universum.utalca.cl/contenido/index-00/boisier.pdf>
- BURGOS, G. (2003). Independencia Judicial en América Latina. ¿De quien? ¿Para quien? ¿Cómo? (Ed.) *Colección de Textos Aquí y Ahora*. 1a Edición: Ilsa, Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/taq02/Taq02-02-04.pdf>
- CORTES, D. y VARGAS, J. (2012). Inequidad Regional en Colombia. *Serie Documentos de Trabajo. Universidad del Rosario*. Recuperado de [http://www.urosario.edu.co/urosario\\_files/4d/4d277c8b-4568-46db-9bd6-ebbc8235e08d.pdf](http://www.urosario.edu.co/urosario_files/4d/4d277c8b-4568-46db-9bd6-ebbc8235e08d.pdf)
- CUELLAR, M. (2000). *Colombia un Proyecto Inconcluso. Valores, Instituciones y Capital Social*. Universidad Externado de Colombia. Tomos I y II.
- DELGADO, M. (2014). Educación Básica y Media en Colombia: Retos en Equidad y Calidad. *FEDESARROLLO – Centro de Investigación Económica y Social*. Recuperado de <http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/La-educaci%C3%B3n-b%C3%A1sica-y-media-en-Colombia-retos-en-equidad-y-calidad-KAS.pdf>
- DE ZUBIRÍA, A. (2012). La Historia de la Rama Judicial en Colombia. *Revista Criterio Jurídico Garantista*. Recuperado de [http://www.fuac.edu.co/recursos\\_web/documentos/derecho/revista\\_criterio/articulosgarantista6/08\\_Historia\\_de\\_la\\_rama\\_judicial.pdf](http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista6/08_Historia_de_la_rama_judicial.pdf)
- FRANCO, A. 1997. *Independencia Judicial y Política en Colombia*. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Universidad Javeriana. Recuperado de <http://lasa.international.pitt.edu/LASA97/franco.pdf>.

Foronda-Robles, C., & Galindo-Pérez de Azpillaga, L. (2012). Argumentación relativa a la confianza territorial. Claves sobre capital social. *Cuadernos de desarrollo rural*, 9 (68), 41-63.

GALVIS, L. y BONILLA, L. (2011). Desigualdades Regionales en el Nivel Educativo de los Profesores en Colombia. *Revista de Economía Institucional*. Recuperado de <http://www.economiainstitucional.com/pdf/No26/lgalvis.pdf>

GRANOVETTER, M. (1973). The Strenght of Weaks Ties. *American Journal of Sociology*, (78): 1360-1380.  
[https://sociology.stanford.edu/sites/default/files/publications/the\\_strength\\_of\\_weak\\_ties\\_and\\_exch\\_w-gans.pdf](https://sociology.stanford.edu/sites/default/files/publications/the_strength_of_weak_ties_and_exch_w-gans.pdf)

García, M. y Herreros, F. (2006). ¿Por qué confiar? El problema de la creación de capital social. *Papers: revista de sociologia* [en línea], (80), p. 287-290.  
<http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/52776/388628>

Herreros, F. (2003). Las Fuentes de la Confianza Social. *Revista Internacional de Sociología*, 16 (75). Recuperado de <http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewArticle/304>.

Lanzara, G. (1999). La dificultad de construir instituciones. *Desarrollo económico*, Vol. 38. No. 152. Pp. 925 – 952. Recuperado de <http://de.ides.org.ar/desarrollo-economico-no-152/>

Luhmann, N. (1996). *Confianza*. Anthropolos.

Laso, E. (Octubre, 2007). *Confianza, Desarrollo y Coruupción: Un Estudio de Psicología Social*. En FLACSO, 1º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Congreso llevado a cabo en Quito, Ecuador.

Martínez, M. (2004). Independencia Judicial. *Centro de Estudios Políticos y Constitucionales*. Madrid.

Moncayo, E. (2002). Glocalización: Nuevos Enfoques Teóricos sobre el Desarrollo Regional en el Contexto de la Integración Económica y la Globalización. *Desafíos*, (7) 50-99. Semestre II, Bogotá – Colombia.

Montero, J., Zmerli S. y Newton, K. (2008). Confianza Social, Confianza Política y Satisfacción con la democracia. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*. Recuperado de [http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS\\_122\\_011238570387245.pdf](http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_122_011238570387245.pdf)

Orion, Lewis y Steinmo, S. (2011). Tomemos en serio la evolución: Análisis institucional y teoría evolutiva. *Revista de Economía Institucional*. Recuperado de <http://www.economiainstitucional.com/pdf/No24/olewis24.pdf>

Putnam, R. (1995). *Making Democracy World. Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

Rawls, J. (2006). *Teoría de la Justicia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Sánchez, A. y Otero, A. (Editores). (2014). *Educación y Desarrollo Regional en Colombia*. Colección de Economía Regional Banco de la República. Recuperado de [http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lbr\\_educa\\_desarrollo\\_regional\\_2.pdf](http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lbr_educa_desarrollo_regional_2.pdf)

SALZBERG, Eli M. (1993). A Positive Analysis of the Doctrine of Separation of Powers, or: Why Do We Have an Independent Judiciary?, *13 International Review of Law and Economics*, 349.

Streeck, W. y Thelen, K. (2005). *Introduction: Institutional Changes in Advanced Political Economies. Beyond Continuity*, Oxford, Oxford University Press.

Toharia, J. (1999). La independencia Judicial y la Buena Justicia. En Revista Justicia y Sociedad, Hacia un Mejor Servicio Público de la Justicia, PENUD, publicación 3.

United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, *Global Study on Homicide* (Vienna: Naciones Unidas, 2013). Disponible en [https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014\\_GLOBAL\\_HOMICIDE\\_BOOK\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)

Uslaner, E. (2002). *The Moral Foundations of Trust*. Cambridge: Cambridge University Press.